

AVANCE

Revista mensual de opinión y debate
Número 62 | Enero de 2026

DE LA LIBERTAD

A portrait of Rafif Jouejati, a woman with short brown hair, wearing a light pink blazer and a patterned scarf. She is smiling slightly and looking towards the camera. The background is an indoor setting with a white wall and a modern light fixture.

Rafif Jouejati

LA VOZ DEL LIBERALISMO EN LA NUEVA SIRIA

Mamdani | Hungría | ¿Guerra con Rusia? | Chile | Autónomos
Política energética | Juego | Derecho indígena | Calidad normativa

Innovación sostenible

Taiwán emplea la tecnología más avanzada bajo la iniciativa de los Cinco Sectores Industriales de Confianza, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Sus capacidades en alta tecnología, medio ambiente, energías renovables, atención sanitaria, seguridad y desarrollo democrático, convierten a Taiwán en un miembro confiable y responsable de la comunidad internacional e impulsan la necesidad de su participación significativa en organismos internacionales, como la ONU, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), INTERPOL, OMS y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).



Visite nuestras redes sociales:

FB

X



Fotos: Ministerio de Relaciones Exteriores



AVANCE DE LA LIBERTAD

Revista mensual de opinión y debate editada por la Fundación para el Avance de la Libertad.

Núm. 62 | Enero de 2026

Foto de portada: Archivo

Consejo Editorial

Roxana Nicula (Presidenta)
Luis I. Gómez, Eric Herrera,
Antonella Marty, Artur Nadal,
Ignacio Rico

Director: Juan Pina
Subdirector: Federico López



Sede: Gran Vía, 6, 4ª planta
28013 Madrid (España)
www.fundalib.org | avance@fundalib.org

ISSN: 2792-2146. Dép. Legal TO 126-2021

La publicación de los contenidos firmados no implica que la revista o la Fundación coincidan con lo expresado.

Esta revista cuenta con el apoyo económico de Atlas Network, la red mundial de think tanks pro libertad. Más información en www.atlasnetwork.org



Rafif Jouejati es una de esas personas que impulsan el mejor liberalismo en las peores circunstancias. Una de las voces prominentes del nuevo partido liberal sirio que se está constituyendo sobre el movimiento Ahrar ("los libres"), Jouejati tiene una larga experiencia como activista por los Derechos Humanos. En su conversación con Roxana Nicula nos traslada la situación actual del país árabe, en el que considera fundamental la presencia de un partido laico y respetuoso del pluralismo etnocultural y religioso. Nos cuenta también las atrocidades cometidas por Rusia en su país para mantener en el poder, aunque sólo fuera en Damasco, al tirano Bachar el-Assad, hijo del otro tirano que ya masacraba a su propia población en plena Guerra Fría. Felizmente, Assad ya no está. Huyó a Rusia para que Putin le diera santuario y los sirios no pudieran juzgarle. Pero el nuevo poder tiene también algunas sombras importantes.

En nuestro repaso por el mundo alertamos del truco que denuncian los liberales húngaros: Orbán podría intentar permanecer en el poder pese a perder las elecciones, en virtud de una peripecia jurídica que podría ser legal siendo políticamente ilegítima. Pero nos fijamos también en el otro populismo, el de la izquierda radical que ahora encarna el alcalde de Nueva York, un populismo que sólo se diferencia del de ultraderecha en la estética. Analizamos también la situación prebélica que se

CARTA DEL DIRECTOR



va consolidando entre Europa y Rusia. En América Latina valoramos la llegada de Kast al poder en Chile. En Economía, destaco el artículo de Bosco Aspe sobre la importancia de la calidad normativa, un objetivo sobre el que trabaja la Fundación con Epicenter, como recogemos en la sección Activismo, donde también damos cuenta de los intensos esfuerzos de la Fundación para evitar el cierre de nuestras centrales nucleares, y de los preparativos para la segunda Olimpiada de Economía. En nuestra dinámica habitual de debate entre posiciones liberales encontradas nos ocupamos del Derecho especial para las comunidades indígenas. En España hablamos de energía y de autónomos, y contamos el VII congreso del Partido Libertario. Y en Polis comparamos la doctrina geopolítica de Trump con la de Monroe. Feliz año y feliz lectura.

Juan Pina

RECIBE AVANCE EN TU DOMICILIO Sólo se te cargará cada mes el número corriente



Sólo tienes que ir a la pasarela de cobros de la Fundación y escoger la modalidad mensual para una donación de al menos seis euros. Después, escribe a avance@fundalib.org especificando tu nombre, apellidos y dirección postal completa. Captura este código QR con tu móvil o ve a:

<https://donorbox.org/libre-donacion-fundalib>

LA VOZ DEL LIBERALISMO EN LA NUEVA SIRIA

Rafif Jouejati

16

La principal impulsora del nuevo partido liberal sirio Ahrar ("los libres") nos explica su proyecto para un país devastado por los Assad y por Rusia.

SECCIONES

06	UN POCO DE TODO	32	POLIS
08	MUNDO	34	IDEAS
20	AMÉRICA LATINA	40	HISTORIA
22	ESPAÑA	42	QUÉ LEER
28	ECONOMÍA	46	ACTIVISMO



10

UNA GUERRA CON RUSIA YA ES MUY PROBABLE

Las probabilidades de un conflicto entre Europa y Rusia en los próximos años ya son las más elevadas desde hace muchas décadas. Con o sin Washington, debemos prepararnos. *Si vis pacem para bellum.*



14

MAMDANI, EL OTRO PELIGRO POPULISTA

La reciente llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York es un síntoma de cómo el populismo de extrema izquierda está resurgiendo como respuesta al de extrema derecha. Ambos se parecen y se retroalimentan.



24

CONTINÚA EL ATRACO A NUESTROS AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos encaran 2026 confrontándose un año más con la brutal agresión fiscal y regulatoria que les inflige el gobierno colectivista. Desgranamos el monto exacto del atraco que sufrirán este año.



36

A DEBATE: EL MARCO JURÍDICO DE LAS ETNIAS INDÍGENAS

En los países donde existen comunidades indígenas, es intenso el debate sobre si deben o no tener un marco jurídico propio y diferente del que se aplica a los demás ciudadanos. Los liberales presentan dos posiciones.



40

Y HINDENBURG LE ENTREGÓ LA CANCELLERÍA

Hace noventa y tres años, un presidente débil y anciano hizo canciller de Alemania a Adolf Hitler. No fue un nombramiento al uso. Hindenburg abrió una caja de Pandora que conduciría a Europa a la guerra y al Holocausto.



48

PREPARADOS PARA UN 2026 MUY OLÍMPICO

La Fundación ya está calentando motores para la segunda edición de la Olimpiada de Economía, tras el éxito de la celebrada en 2025. ¿Quiénes serán los cinco estudiantes que nos representen en agosto en Olimpia?

AVANZA...



UE. Por fin un avance. Desde agosto se ha reforzado la protección de la independencia y libertad de los periodistas y sus fuentes al entrar en vigor la directiva EMFA.

DATOS Y CIFRAS



65 Jurisdicciones de todo el mundo penalizan aún las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo. Fuente: *Human Dignity Trust*.

5 Puestos que ha bajado España en el Índice de Libertad Humana, cayendo hasta el puesto 31 de los 165 países analizados. Fuente: *Cato Institute*.

66 Jurisdicciones (en cuarenta países) han despenalizado en alguna medida las drogas desde 2024. Fuente: *Penal Reform International*.

LA LIBERTAD HACE...

...25 AÑOS - ENERO DE 2001

El día 26 entra en vigor el protocolo de la Convención contra la Tortura, reforzando los mecanismos del Derecho mundial en esta materia. En la primera foto su impulsor, el suizo Jean-Jacques Gautier.

...50 AÑOS - ENERO DE 1976

El día 24 dimite por fin Carlos Arias Navarro (segunda imagen), el presidente del gobierno heredado del régimen franquista. Comenzará así el proceso que llevará a la presidencia a Adolfo Suárez, escogido por el rey Juan Carlos I para llevar a cabo la transición a la democracia.

...75 AÑOS - ENERO DE 1951

El día 28 se detiene en Checoslovaquia al viceministro de Asuntos Exteriores Artur London (tercera foto), acusado de conspirar contra el Estado. Es una de las primeras purgas en el proceso de represión de la disidencia interna que se extiende por todo el bloque comunista.

...100 AÑOS - ENERO DE 1926

El día 31, Benito Mussolini (cuarta foto) recibe poderes especiales para gobernar por decreto. Se suprimen los derechos de asociación y de reunión comenzando la persecución abiertamente política e ideológica. Se pasa a controlar los medios de comunicación desde el Estado, y se institucionaliza la represión a manos de policía y ejército.



LIBERTÓFILOS y LIBERTÓFOBOS



JULES MAATEN

El director de la oficina europea de la Fundación Friedrich Nauman (FNF) ha organizado en diciembre una nueva conferencia para la definición de objetivos y principios en torno a la Europa de 2050, un ejercicio intelectual más necesario que nunca.



DONALD TRUMP

El presidente de los Estados Unidos dio a primeros de diciembre una nueva vuelta de tuerca a la desafección de su país frente a Europa, e incluso encargó un plan estratégico que incluye el apoyo proactivo de Washington a nuestros partidos ultras.



ANA CORINA SOSA MACHADO

En nombre de su madre, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, pronunció el mes pasado en Oslo el discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz otorgado a su madre, que acompaña como suplemento a este número de AVANCE.



VIKTOR ORBÁN

El aún primer ministro populista, ante la probable derrota electoral en primavera de 2026, estaría considerando un truco legal para pasar antes a la presidencia (simbólica y sin poder) del país, y dotarla de facultades más amplias para seguir controlando Hungría.

MUNICIÓN DE COMBATE



GARRY KASPAROV

Campeón de ajedrez y disidente exiliado de Rusia.

"Putín jamás se arriesgará a perder el poder, porque le aterroriza lo que le pasaría si su pueblo accediera al conocimiento de la verdad".

"En gran parte de Occidente, durante las últimas décadas, nos hemos dedicado a reemplazar lo que funciona con lo que suena bien".



THOMAS SOWELL

Economista y teórico de la sociedad, Estados Unidos.

Orbán podría quedarse en el poder tras perder

Los medios independientes ya están alertando de una posible maniobra del líder nacionalpopulista para permanecer en el poder pese a perder en abril de 2026.

Alfredo Salafranca

Cuando un gobierno empieza a ver las urnas como un trámite desagradable y no como el mecanismo inexcusable de legitimación, la democracia está amenazada. En Hungría, esa alarma vuelve a sonar a medida que se acercan las legislativas de abril de 2026 y el partido de Viktor Orbán, Fidesz, ya no aparece invencible en los sondeos ante el auge de TISZA, el movimiento de Péter Magyar, que ya disputa la primera posición.

En ese contexto han reaparecido los rumores sobre un “plan B” del poder saliente. La idea que circula —recogida por periodistas como Szabolcs Panyi y medios como *Bloomberg*— consiste en trasladar a Orbán de la jefatura del Gobierno a la presidencia de la República para, desde allí, rediseñar el sistema y convertir ese cargo (hoy principalmente simbólico) en el centro real del poder. El Gobierno húngaro lo niega con contundencia: el portavoz Zoltán Kovács lo califica de “fake news” y recuerda que cualquier cambio constitucional exige una mayoría de dos tercios. Pero precisamente esa condición —la *supermayoría*— es lo que hace que el rumor no sea una fantasía alocada, porque Fidesz aún la mantiene en el parlamento. Por ello, este mecanismo institu-

cional es verosímil pese a tratarse de un evidente fraude político, ya que en Hungría al presidente lo elige la Asamblea Nacional y su papel es, en la práctica, el de árbitro ceremonial, aunque con facultades como devolver leyes o remitirlas al Tribunal Constitucional. Hoy el cargo lo ocupa Tamás Sulyok, elegido en 2024 por un Parlamento dominado por Fidesz, tras la dimisión de Katalin Novák tras conceder un indulto cuestionable. Si un partido con dos tercios puede escoger el presidente, también puede —si decide cruzar ese Rubicón— reformar el equilibrio de poderes. No bastaría “colocar” a Orbán en un puesto honorífico, sino que a renglón seguido se elevaría ese puesto por encima del gobierno que surja del parlamento elegido en primavera de 2026. Un movimiento así sería antidemocrático aunque revistiera formalidad constitucional. La esencia de la democracia liberal es que las reglas del juego no se reescriben para impedir que la derrota electoral tenga consecuencias. Pero

Orbán lleva muchos años coqueteando con esas ideas. En 2014, en su célebre discurso de Băile Tușnad, proclamó que Hungría estaba construyendo un “Estado iliberal”. Cuando un líder enuncia ese horizonte, no está anunciando un matiz tecnocrático, sino una prioridad política: reducir los contrapesos —tribunales, prensa, sociedad civil— para que el gobierno deje de ser un mandato revocable y se convierta en un régimen.

En el caso de Orbán no hace falta retórica: la deriva es empírica. Las métricas internacionales sobre libertades y calidad democrática llevan años degradándose. Freedom House califica a Hungría como “partly free” y le asigna sesenta y cinco puntos sobre cien en 2025. V-Dem la sitúa como “autocracia electoral”, consolidando un patrón de autocratización. Y la Comisión Europea sigue documentando problemas estructurales en su capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho, precisamente en las áreas que un liberal considera innegociables: independencia judicial, plura-

lismo mediático y frenos institucionales. A esa erosión se suma la corrupción sistemática. Transparencia Internacional otorga a Hungría cuarenta y un puntos sobre cien en 2024 (puesto 82 de 180). El conflicto con Bruselas por el menoscabo masivo del Estado de Derecho ha terminado con miles de millones congelados o suspendidos para evitar el ecosistema de captura institucional de fondos europeos por parte del régimen. Incluso Estados Unidos sancionó en 2025 a Antal Rogán, ministro clave del entorno Orbán, bajo el paraguas de las normas Magnitsky, precisamente por acusaciones de corrupción sistémica. Cuando el poder se prolonga tanto como en el régimen de Orbán, la tentación no es sólo gobernar más sino blindarse para no rendir cuentas por lo hecho mientras se gobernaba.

Y, mientras tanto, la promesa de prosperidad se ha vuelto más frágil. Hungría presenta una economía atrapada en el estancamiento y un gobierno que recurre a las dádivas incrementando el gasto para comprar votos y capear como sea el inminente proceso electoral. Eurostat sitúa a Hungría con un PIB per cápita muy por debajo de la media comunitaria (20.480 frente a 37.620 euros). Y, si miramos el bienestar material efectivo, la comparación es aún más incómoda: en 2024 el consumo individual efectivo de Hungría se situó en el 72% de la media de la UE, el nivel más bajo de toda la Unión. En paralelo, el país sufrió en 2023 el mayor pico inflacionario de los últimos veinticinco años. Es obvio que el “modelo Orbán” no está convergiendo hacia el corazón próspero de Europa: está normalizando una Hungría más pobre, más dependiente y con menos garantías. El furgón de cola de la UE.

Toda esta deriva responde a un patrón. El populista puede llegar al poder por las urnas, pero después se resiste a la posibilidad real de perderlo. Lo vemos también en Estados Unidos: Trump ha jugueteado con la idea de un tercer mandato y llegó a hablar de que “hay métodos”, mientras su entorno —con Steve Bannon



como altavoz— insiste en estrategias para rebasar el límite constitucional. Después, Trump dice que “no está permitido” y que él no lo perseguirá, pero el ruido persiste, alimentado incluso por propuestas formales de enmienda para permitir tres mandatos, u otros vericuetos legales. La lección liberal es sencilla: las instituciones sólo resisten si la sociedad entiende que la alternancia no es una molestia, sino una necesidad.

Por eso, si en Hungría la hipótesis de “Orbán presidente con poderes reforzados” es sólo un globo sonda, hay que pincharlo ahora, con claridad moral y con presión política. Y si no es sólo un rumor, sino un plan, hay que combatirlo con una victoria nítida en las urnas y con un mandato democrático imposible de retorcer. La esperanza se llama Péter Magyar, y no porque sea un salvador, sino porque puede encarnar el principio que Orbán lleva demasiado tiempo intentando relativizar: que gobernar es algo temporal. El partido liberal húngaro Momentum debate abiertamente no presentarse para no fragmentar el voto opositor en

2026, precisamente en clave de “cambio de régimen”: renunciar a las siglas propias puede ser, en momentos críticos, una forma de responsabilidad. Si el objetivo es restaurar contrapesos de poder, abrir los medios, despolitizar las instituciones y limpiar la contratación pública, lo coherente es sumar fuerzas. Esta posición de los liberales húngaros es heroica. Hungría no necesita un “Estado iliberal” más eficiente; necesita volver a la tradición liberal europea que nace de la Ilustración: ley por encima del líder, derechos por encima del partido, alternancia por encima del miedo. Y, si Orbán de verdad está pensando en una escapatoria presidencial para permanecer, que se encuentre con lo único que no puede reformar a su antojo: una ciudadanía que, al votar, le grite con hartazgo “¡basta!”

	Colaborador de AVANCE.
	Archivo.

Una guerra con Rusia ya es muy probable

Tras el abandono de Europa por parte de Washington, con un Trump que ha tomado partido claramente por el régimen del Kremlin, sólo nos queda prepararnos.

Andrés Rueda

En apenas unos meses, el tono de los dirigentes europeos ha pasado de la alarma contenida a una advertencia casi pedagógica: “preparaos para una guerra como la de vuestros abuelos”. No lo ha dicho un columnista apocalíptico, sino Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en Berlín a mediados del mes pasado, al pedir a los aliados que dejen de comportarse como si el tiempo jugara a su favor. En su planteamiento, la pregunta ya no es si Rusia “amenaza”, sino cuándo podría estar en condiciones de probar la credibilidad de la Alianza: él ha hablado de un horizonte de hasta cinco años para una amenaza militar contra territorio OTAN si Europa no acelera su rearme. Rutte no está solo. Estonia lleva tiempo verbalizando la idea de una “prueba” rusa a corto plazo. Y el mapa mental del Báltico —más sensible que ningún otro al pulso de Moscú— se ha extendido al resto de Europa: los servicios de inteligencia alertan de que una congelación del frente de Ucrania podría permitir a Rusia reconstituir fuerzas y aumentar la presión militar en el flanco noreste de la OTAN.

En Alemania ya se habla abiertamente de “preparación” y de que la franja entre paz y guerra se está difu-

minando, con la inteligencia alemana advirtiendo de una confrontación que podría calentarse sin previo aviso. En Suecia, el lenguaje es aún más directo: un ministro ha llegado a decir que “podría haber guerra a corto plazo en Suecia”. La tesis común es clara: no es que Rusia vaya a atacar mañana; es que Europa ya está entrando en la fase previa, en la que el adversario mide voluntades observándonos detenidamente, produce capacidades y erosiona nuestra cohesión por vías híbridas. Y los hechos empiezan a acumularse. Veamos tres de esos cúmulos.

- **Primero**, la economía de guerra rusa. En documentos de la OTAN se subraya que Rusia ha puesto su economía en pie de guerra elevando el peso presupuestario y acelerando su producción industrial militar, con apoyos externos como China, Irán, Corea del Nor-

te. El argumento es aritmético: si Moscú puede reponer munición, blindados y drones más rápido que Europa, y si lo hace de forma muy superior a las necesidades de la actual guerra con Ucrania, el riesgo estratégico es insoslayable.

- **Segundo**, la reforma militar y el re-posicionamiento hacia el Oeste. La inteligencia estonia ha descrito reformas que implican más fuerzas cerca de su frontera y una anticipación del Kremlin de un posible choque con la OTAN en los próximos años. En paralelo, Dinamarca —que no es un país dado al dramatismo— ha advertido que, si el frente ucraniano se congela y Occidente no se rearma, Rusia podría llegar a representar una amenaza creíble para uno o más países OTAN del área báltica en plazos cortos de pocos años.
- **Tercero**, la guerra híbrida ya está

Si lo que Europa quiere es evitar la guerra, tiene que prepararse para ella: la disuasión sólo funciona si el enemigo cree que su precio será insoportable.



Mark Rutte, Secretario General de la OTAN y ex primer ministro liberal de los Países Bajos.

aquí. Cuando Alemania convoca al embajador ruso por sabotajes, ciberataques e interferencias (hace unas semanas), no está describiendo un riesgo hipotético sino un conflicto vivo. Y cuando Rusia normaliza en su retórica la idea de que “OTAN y UE” están ya “en guerra” por apoyar a Ucrania, no estamos ante una mera soflama propagandística sin mayor recorrido: es el tipo de frase que, repetida y amplificada, justifica escaladas y “respuestas” ante la audiencia doméstica.

¿Y qué hay de los indicios más “técnicos”, como las compras de material

médico de guerra? Los ejércitos que se preparan para conflictos de alta intensidad rehacen su sanidad militar, su capacidad de evacuación, su stock de sangre, sus cadenas de suministro, sus mecanismos de reparación y sus depósitos de munición. En la fase previa a la invasión de 2022, por ejemplo, se informó de movimientos logísticos rusos relacionados con suministros médicos (incluida sangre), señal de preparación operacional. Hoy no es simplemente que haya “más vendas”, sino que Europa está redescubriendo —a la fuerza— que la guerra no se gana con declaraciones, sino con producción, sanidad, munición y estocaje. Y tanto Moscú como los grandes países europeos es-

tán intensificando todo esto, sin airearlo demasiado.

Con ese marco, hablar de un horizonte dos a cinco años deja de ser futurología: es una ventana de riesgo con supuestos bastante concretos. Si Rusia logra un alto el fuego que le permita reorganizarse sin desgaste diario, si conserva un núcleo de veteranos, si mantiene el gasto militar elevado y si percibe fractura política en Occidente, sin duda intentará una operación limitada para medir la respuesta aliada. Por eso es un suicidio dejar que Rusia salga del conflicto ucraniano sin un coste fuerte.

Pero, ¿dónde podría comenzar el “test” ruso a Europa? Los manuales llevan décadas señalando los puntos de fricción más probables:

- **Países bálticos**: no necesariamente por un deseo de ocuparlos para siempre, sino porque una crisis allí pone a examen el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte en el escenario más difícil

Si el régimen ruso consigue un alto el fuego que le permita reorganizarse y rearmarse, intentará una operación limitada para medir nuestra respuesta.

Ahora los europeos debemos perseguir dos objetivos a la vez: forzar a Trump a volver a la defensa del espacio euroatlántico y, por si eso no ocurre, estar preparados para defender Europa y el conjunto de Occidente sin Washington.

- **Corredor de Suwałki / Kaliningrado:** cualquier incidente alrededor de ese cuello de botella (entre Polonia y Lituania) podría escalar por dinámica de refuerzo y contrarrefuerzo, con Kaliningrado como pieza militarizada y políticamente simbólica, enclavada en la UE.
- **Moldavia / Transnistria:** un foco "periférico" que busca dividir a Europa entre "los que quieren implicarse" y "los que no", con la ventaja rusa de mover tensión sin cruzar inmediatamente una frontera OTAN. Además, el conflicto cultural entre la Moldavia rumanoparlante y latina y la Transnistria rusófona es una agresión simbólica al flanco sudoriental de la OTAN y de la UE. El objetivo ruso sería cerrar la salida de Ucrania al mar Negro añadiendo Odesa a sus conquistas del Donbás, y enlazando así con Transnistria. Sería además un símbolo de cómo la Rusia ahora reforzada como superpotencia "rescata" a las bolsas de población rusófona que "quedaron atrás" en las nuevas repúblicas surgidas de la descomposición soviética en 1991.
- **Georgia:** de nuevo, un teatro donde Rusia ha demostrado históricamente que puede combinar presión militar, política y narrativa. Tras haber desgajado Abjasia y parte de Osetia, Moscú intentaría esta vez anexionar Georgia o convertirla en un protectorado, y el siguiente paso podría ser Armenia, o lo que queda de ella tras haberla traicionado Putin a favor de los intereses azeríes (y turcos).

Europa no tiene que apostar a cuál será la chispa exacta. Basta con asumir que Rusia escogerá la chispa que

El Corredor de Suwałki, entre el enclave ruso de Kaliningrado y el territorio de Bielorrusia (aliada de Rusia), posible foco bélico.



maximice nuestra división. Y, por primera vez en mucho tiempo, el mayor acelerador de esa división no está en Budapest ni en Bratislava. El problema estructural es Washington. No porque Estados Unidos haya dejado de ser poderoso, sino porque su poder se ha reorientado a favor de nuestro enemigo. Trump ha dicho explícitamente que no defendería a aliados OTAN, y ha erosionado la claridad del compromiso mutuo. Ha llegado incluso a flirtear con ideas como expulsar a España o imponer castigos comerciales vinculados al gasto militar. Y en Europa, varios servicios de inteligencia aliados ya escriben —sin rodeos— sobre la incertidumbre del paraguas estadounidense. A estas alturas, muchos europeos ya no discuten si Trump "simpatiza" con Moscú o si simplemente instrumentaliza la OTAN como palanca. La consecuencia práctica es la misma: Rusia percibe una oportunidad. Y Europa, si quiere sobrevivir políticamente, debe construir su seguridad como si Estados Unidos pudiera no estar, o no estar a tiempo.

Eso nos lleva a una conclusión inevitable: Europa tiene que unirse en política exterior y defensa, y hacerlo ya. Tenemos dos potencias nucleares europeas —Francia y Reino Unido— con asiento permanente en el Consejo

de Seguridad. Eso no resuelve todo, pero sí ofrece el núcleo de un liderazgo estratégico y disuasorio. La UE, por su parte, dispone del músculo económico e industrial para financiar y escalar la producción militar. Lo que falta es voluntad: compras conjuntas, estándares comunes, cadenas de suministro europeas, munición y defensa aérea en serio, y una arquitectura política que resista vetos internos cuando la amenaza aprieta. Hay que poner fin a vetos como el húngaro: quien no quiera estar que no esté, pero si está, que esté con todas las consecuencias. Y aquí España merece una frase incómoda: Llegamos tarde. Durante años hemos estado en la cola del gasto relativo en defensa en la OTAN (alrededor del 1,2–1,3% del PIB en 2024 según estimaciones aliadas), y sólo bajo presión reciente se ha acelerado el compromiso de acercarse al 2% en 2025.

En un mundo donde se habla ya de metas más altas, discutir el 2% como si fuera un lujo es una irresponsabilidad: el coste real no es presupuestario sino geopolítico. Y se paga en soberanía: o formamos parte de un Occidente y de una Europa independientes de las otras superpotencias, o somos mera mercancía en los arreglos entre éstas.

Si Europa quiere evitar la guerra, debe prepararse para ella. No por fe-

tichismo militar, sino porque la disuasión sólo funciona si el adversario cree que el precio será insostenible. Y si Washington insiste en la ambigüedad —o en la retirada—, Europa debe reconstruir Occidente y prepararlo para actuar sin Estados Unidos. La UE y el Reino Unido como eje, coordinados estrechamente con Canadá, Australia, Japón y el resto de democracias avanzadas dispuestas a asumir costes, deben darse dos objetivos simultáneos: forzar a Trump a volver al papel que le corresponde en la defensa del espacio euroatlántico y, si eso no ocurre, estar listos para defender Occidente sin él. No será fácil, pero rendirnos a la piza Xi-Putin-Trump no puede ser jamás una opción. El Occidente moderno, liberal, enraizado en el librepensamiento ilustrado, no es negociable. Y para sobrevivir necesita evitar un cambio de paradigma social y político, cultural incluso, que nos retrotraiga a hace cien años o más. El populismo autocrático debe ser derrotado en Europa, en Norteamérica, en Rusia, en el mundo.

	Colaborador de AVANCE.
	Shutterstock.

Mamdani, el otro peligro populista

El auge del populismo ultraderechista está generando un resurgimiento del populismo ultraizquierdista. Ambos se retroalimentan y minan la democracia liberal.

Mercedes Páez

El populismo es una perversión de la democracia porque no la entiende como un sistema de límites, derechos y procedimientos, sino como un atajo moral. Si seguimos las explicaciones del principal teórico populista, el argentino de extrema izquierda Ernesto Laclau, el populismo no es tanto un programa como una técnica: construir “el pueblo” como un sujeto único, oprimido por “la élite”, uniendo demandas heterogéneas en una misma cadena emocional y simbolizándolas en consignas suficientemente vacías como para que cada cual proyecte en ellas su frustración. Lo importante en la estrategia populista no es tanto generar afinidad hacia uno mismo, sino odio a un enemigo brutal que se esculpe cuidadosamente. Esa argamasa es más efectiva que promover una buena causa o unos ideales elevados.

Cuando un populismo avanza, el sistema generalmente produce su reflejo.

Ese método ha existido siempre en la izquierda, pero en las dos últimas décadas la derecha radical lo ha copiado con éxito, sustituyendo el repertorio de agravios por uno más identitario y securitario. Se ha cambiado la clase oprimida por la nación amenazada, y el temor a la pobreza por el temor a la invasión cultural. Poco más ha cambiado. El resultado es el nacional-populismo: la misma lógica plebiscitaria, la misma desconfianza hacia el individuo y su libertad, el mismo desprecio por el pluralismo, sólo que con otros enemigos y otra estética.

Lo inquietante es que, cuando un populismo avanza, el sistema suele producir su reflejo. Y ahí aparece el riesgo: si el populismo de derechas ocupa en cada país, en general, un tercio del espacio institucional y el de izquierdas otro tercio, ¿cuánto margen queda para la normalidad democrática? La democracia liberal se ve abocada a la asfixia si la política se convierte en una guerra de religiones civiles y lo razonable se ve tachado por unos y otros de “tibio”, ya que no se permite la ponderación ni la moderación, y se obliga a todos a tomar partido ferozmente por uno u otro bando, a cual más irracional y liberticida.

El nuevo alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, ilustra ese rebrote del populismo de izquierdas como

respuesta al de derechas. Conviene ser precisos: Mamdani no es “un meme”; es un político con mandato electoral y con una agenda nítidamente intervencionista. Ha defendido congelar los alquileres regulados como pieza central de su política de vivienda, incurriendo en una senda de imposición de precios desde el Estado que recuerda a la Unión Soviética. Ha impulsado la idea de tiendas de alimentación públicas o de titularidad municipal, presentándolas como herramienta para abaratar la cesta de la compra, lo que recuerda también a los nefastos economatos colectivizados y regentados por las administraciones públicas en la Europa del Este pre-1989, generando hambre y desabastecimiento. Ha hecho de la gratuidad del transporte un emblema político, lo que constituye compra de votos con el sistema habitual: regalar con cargo a todos ciertas dádivas al electorado propio. Ha coqueteado con metas salariales muy llamativas, como el “treinta dólares en 2030”. En materia de seguridad, habla de una supuesta “seguridad comunitaria” que recuerda al chavismo o al régimen nicaragüense al insinuar estructuras barriales con ciertas atribuciones.

Su biografía también importa, porque el populismo suele venderse como “voz de los de abajo” incluso cuando

nace en entornos muy por encima de la media. Mamdani nació en Kampala (Uganda) en 1991, se crió en Nueva York desde niño, estudió en la Bronx High School of Science y se graduó en Bowdoin. No es precisamente un representante de la América más vulnerable y empobrecida, sino de las élites intelectuales que emplean el populismo como estrategia, no porque vaya en su ADN ideológico personal. Una suerte de *gauche divine* gringa. Es miembro de los Democratic Socialists of America, de izquierda radical.

La conclusión debería ser obvia: contra cada populismo no hacen falta populistas inversos sino dirigentes sensatos, con carisma quizá pero sobre todo con una propuesta reformista creíble desde la franja central del espectro. Los populismos se comprenden mutuamente y se respetan: véase el primer encuentro entre Trump y Mamdani. Fue un pequeño manual de “espacio rojipardo”: meses de insultos, y luego sonrisas, elogios cruzados y promesas de colaboración en el Despacho Oval. La escena señala una verdad incómoda: la teoría de la herradura no es una broma. Los extremos se reconocen en su estilo y casi siempre están más cerca entre sí que de la política normal. Son un tumor de la democracia liberal, y gravísimo.

Que resurja el populismo de izquierdas es, por tanto, una mala noticia. Y sí: es, en parte, culpa del populismo de derechas, porque ambos se retroalimentan en una espiral de simplificación y revancha. La salida no está en doblar la apuesta, sino en reconstruir el prestigio del sentido común: límites al poder, respeto al pluralismo y políticas que no necesiten inventarse “un pueblo” contra “una élite” para ser defendibles. Quienes tanto señalan a las “élites”, son la verdadera élite o aspiran a serlo. Ya se trate de Mamdani o de Buxadé.

	Colaboradora de AVANCE.
	Archivo.



Joueji: "Assad había prometido reformas que nunca realizó"

La reconocida activista pro Derechos Humanos es una de las voces esenciales del nuevo partido liberal en la Siria que por fin se ha librado del nefasto clan Assad.

Roxana Nicula

Antes de comenzar, te pido que expliques a nuestros lectores tu trayectoria vital. ¿Quién es Rafif Jouejati?

Nací y crecí en Nueva York, y viví también Washington, pero durante mi infancia pasé mucho tiempo también en el país de mis padres, Siria. Mi padre, diplomático de carrera, fue uno de los fundadores del ministerio de Asuntos Exteriores tras la independencia del país. Honestamente, yo nunca me había sentido más vinculada a mi identidad siria que a la estadounidense, pero en 2011, cuando comenzó la revolución contra el régimen sirio, cambié por completo de posición y me involucré en la causa de la libertad en Siria como activista, particularmente en el movimiento de la no-violencia y del activismo laico. Apoyé a las organizaciones que defendían estos principios de Washington, recaudando fondos para ellos, ejerciendo su portavocía en el exterior e impulsando su agenda política. Años más tarde fue secuestrada y pro-

bablemente asesinada la fundadora del conjunto de Comités de Coordinación Local Siria, la reconocida activista Razan Zeitouni. Ella había sido el motor de todo el movimiento laico y no-violento que promovió las protestas en Siria.

¿Fue la traición de aquellas protestas el detonante de cuanto ocurrió después en Siria?

Yo conocía personalmente a Bachar el-Assad y me indigné con él cuando traicionó su palabra. Había prometido reformas que nunca ocurrieron. Se presentaba como un líder de mente abierta y educación occidental que iba a terminar por traer a Siria algún nivel de democracia, pero no era verdad. En

mi caso, como muchas otras personas, me metí de cabeza en la revolución contra el régimen. Y en 2019 me trasladé a vivir en España tras constatar la difícil relación de la oposición siria con la administración Trump.

Cuéntanos el proyecto de partido liberal que estás impulsando en Siria.

El partido se llama Ahrar, que significa "los libres". Aunque la organización es relativamente nueva, muchos de sus integrantes se conocen desde el inicio de la revolución contra Assad, hace ya unos quince años. En la política siria todos tenemos varios gorros, todos formamos parte de varias organizaciones, pero Ahrar es el resultado de una con-

"Un partido liberal laico es fundamental para el juego político pluralista que debe darse en la nueva etapa que está abriendo Siria".



vergencia de entidades y de intereses en torno a la causa del liberalismo en nuestro país. Nuestro objetivo común más relevante es lograr una Siria laica o como mínimo garantizar que el gobierno sea siempre civil y no religioso, que no discrimine en función de las diversas creencias religiosas de la población, ni tampoco en función de sus etnias. promovemos las libertades individuales, la libertad de expresión y opinión, y en suma todo el acervo del liberalismo político. El partido se fundó en la clandestinidad en 2020 y desde entonces hemos trabajado muy duro para obtener el reconocimiento del liberalismo mundial. Ahora estamos en plena tarea de conseguir el reconocimiento del gobierno interino como una de las formaciones políticas partícipes en el nuevo sistema de partidos que se está conformando. Hay que tener en cuenta que hasta ahora no se ha promulgado

legislación de partidos, por lo que ni siquiera se sabe si actuamos dentro o fuera de la legalidad. Estamos en una especie de limbo jurídico. Pero pese a ello hemos decidido ya abrir una oficina en Damasco y anunciar públicamente que existimos y que somos un partido político, pase lo que pase.

En el régimen anterior estaban prohibidos los partidos políticos normales y sólo se permitía la existencia de los llamados partidos "satélites" aceptables por el Ba'ath de los Assad...

Sí, así es. Ahora el gobierno interino se supone que está tratando de mantener la paz y reagrupar a las diversas milicias y sus facciones políticas, e iniciar una transición hacia la democracia. El problema es que este gobierno sigue teniendo un núcleo duro islamista y está por ver su capacidad de fomentar un consenso inclusivo de todas las sensibi-

lidades existentes. Por otro lado, dudo mucho que este gobierno interino tenga los perfiles humanos y técnicos necesarios para gobernar realmente el país, pero tampoco están intentando reclutar esos perfiles, sino que mantienen una visión endogámica y se nutren de leales, no de profesionales. Muchos de nosotros estamos dispuestos a regresar *pro-bono* y ayudar a reconstruir Siria, pero no se está admitiendo a nadie. La mentalidad occidental de la diáspora es absolutamente crucial para la nueva Siria.

¿Cómo es vuestro liberalismo?

Tenemos que encontrar el tipo de liberalismo que protege los derechos de cada persona, de cada sirio, que promueve también una identidad ciudadana común y que respeta las diversas culturas y tradiciones del país. La oportunidad de que un partido laico así forme parte del juego político es

"Rusia ensayó en Siria, antes que en Ucrania, la barbaridad de bombardear primero una ciudad para luego bombardear también a los equipos de rescate y a las ambulancias".



fundamental para el nuevo proyecto de país, pero falta ver si el gobierno interino realmente va a aceptar el pluralismo político necesario para podamos ser un actor más en el sistema. De momento sólo estamos viendo mucha gira internacional de los dirigentes de este gobierno provisional.

¿No se han establecido plazos ni objetivos concretos?

Teóricamente articularán un modelo de gobierno inclusivo que resulte admisible para todos los movimientos políticos. Pero también deberían incrementar la participación de las mujeres en política. Algo muy positivo es que acaban de unirse a la coalición global contra el ISIS. También han prometido restaurar la economía libre para reconstruir el país. Hasta ahora parecen estar respondiendo positivamente a las demandas de las mujeres y de las minorías étnicas. A mi juicio llegaron al poder con una cosmovisión cerrada y están entendiendo que la realidad es mucho más compleja. Y no sólo eso: están entendiendo que los sirios no somos sectarios, que somos ca-

paces de respetar a conciudadanos con un *background* muy diferente.

El régimen de Assad ha destrozado la economía. ¿Qué medidas se están adoptando para la reconstrucción?

Siria tiene a más del 90% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Con Assad no había libertad económica sino mercantilismo y un pseudocapitalismo *crony*, con unos niveles de nepotismo muy altos. El sistema era extremadamente corrupto. Con la caída de Assad, innumerables millonarios conectados con su régimen huyeron del país con todo. El gobierno interino está amnistiando a muchos de ellos para que vuelvan al país y sean una fuerza económica positiva en la nueva etapa: se les pide a cambio iniciar proyectos empresariales relevantes para la reconstrucción. Varios países, incluidos los Estados Unidos, han expresado también su disposición a contribuir financieramente a la reconstrucción. las sanciones contra Assad apenas habían hecho mella en el régimen y sin embargo habían penalizado enormemente

a la población civil, como si no tuviera suficiente con las atrocidades inhumanas y el terrorismo de Estado, y con los bombardeos constantes de la aviación rusa. Ahora que se están levantando las sanciones, espero que en los próximos meses empecemos a ver un repunte de la economía y de los proyectos empresariales en Siria. Ya están pasando cosas menores: por ejemplo ya empiezan a aceptarse tarjetas de crédito en algunos hoteles y otros establecimientos. Y se está empezando a detectar un retorno de parte de la diáspora. Algunos regresan con fondos y con ideas y proyectos empresariales de gran interés. En este año desde la caída de la dictadura ya se han inscrito siete mil nuevas empresas.

En cuanto a los plazos por los que preguntabas, el gobierno interino se ha marcado un plazo de cinco años, de los cuales ya ha transcurrido el primero. Tiene que deshacer nada menos que cinco décadas de la mafia de los Assad. No va a ser fácil, el sistema corrupto estaba profundamente enraizado en todos los sectores de la economía y de la sociedad.

¿Sería sensato promover una iniciativa tipo Magnitsky para congelar los activos de los oligarcas sirios del régimen depuesto y canalizarlos a la reconstrucción del país y de una economía libre?

Sí, habría que repatriar los fondos robados por los Assad y sus *cronies*, por supuesto. Rusia tiene una gran responsabilidad que pagar en Siria por la inmensidad de la destrucción que provocó en el país, incluyendo la voladura de hospitales, escuelas y zonas de vivienda. he visitado algunas de las zonas victimizadas por la brutalidad rusa. Espero que también Europa y los Estados Unidos contribuyan, porque nosotros apelamos a la comunidad internacional desde el principio y avisamos de lo que iba a pasar, del flujo de refugiados y del grado de destrucción que cabía esperar, pero la comunidad internacional se limitó a observar cómo Rusia convertía en polvo vecindarios enteros mientras el régimen de Assad empleaba armas químicas contra la sociedad civil y Rusia convalidaba esa atrocidad. De modo que sí, la comunidad internacional también debería ahora ayudarnos a reconstruir Siria.

¿Fue Siria el laboratorio de los crímenes que después cometería en Ucrania el mismo agresor, Rusia?

Sí, sin duda. Siria siempre estuvo bajo la tutela rusa, esto viene ya de la época soviética en tiempos de Assad padre. Siempre han mantenido dos bases militares en la costa siria. Los ataques sistematizados a la población civil de las ciudades que apoyaban el levantamiento contra Assad, incluso con gas sarín, fueron cuidadosamente preparados por Rusia para causar una tragedia tan terrible que Assad pudiera mantenerse fácilmente en el poder, pero al final ni eso le salvó. Rusia sólo respetó Damasco. Destruyó Aleppo, Hama y otras ciudades. Agredió deliberadamente, calculadamente, mercados y colegios. Ensayó en Siria, antes que en Ucrania, la barbaridad de bombardear primero una ciudad para luego bombardear también a los equipos de rescate y ambulancias. Sí, es el mismo

Quién es Rafif Jouejati

Defensora de los Derechos Humanos, activista política y líder liberal, es dirige la Fundación para Restaurar la Igualdad y la Educación en Siria (FREE-Syria), que promueve los derechos civiles, la educación y la igualdad de género. Durante el levantamiento sirio y la posterior guerra civil que comenzó en 2011, participó en varios grupos de oposición y coordinación: formó parte del comité ejecutivo de los Comités de Coordinación Local (LCC), actuó como portavoz de la Coalición Nacional para la Revolución Siria y las Fuerzas de Oposición durante el proceso de paz de Ginebra II y desempeña funciones directivas en la organización política liberal Ahrar, futuro Partido Liberal Sirio. También colabora a nivel mundial con Nonviolence International para promover el activismo civil no-violento. Además de su activismo, Jouejati trabaja como consultora de gestión y ha prestado servicios de asesoramiento estratégico a organizaciones de la sociedad civil y humanitarias. RN



modus operandi ruso que vemos hoy en Ucrania. Siria fue el ensayo general. Y se documentó todo, pero Rusia quedó impune y el régimen sirio también. Y Moscú extrajo consecuencias de esa impunidad. Por eso el apaciguamiento es absurdo al tratar con Rusia.

Se suponía que Assad iba a ser mejor que el padre pero al final...

Al final resultó incluso más sanginario. Yo hablé con él unos años antes de su ascenso al poder y sí parecía más moderno y moderado, pero cambió. Creo que fue la Primavera Árabe lo que le llevó a enrocarse.

¿Cuáles son las prioridades políticas del partido liberal sirio, Ahrar?

Restaurar el tejido social sirio. Basar nuestra identidad nacional en el respeto a los individuos y a su pluralismo. Canalizar el desacuerdo por medios democráticos y civilizados. Restaurar los servicios esenciales y permitir que surjan negocios y empleo. Implantar un robusto Estado de Derecho. Com pensar a la gente por las propiedades

destruidas. Y a nivel internacional, como partido político ya estamos en la Internacional Liberal, en IFLRY y en otras organizaciones, y en las redes de medios de comunicación pro libertad como al-Hurriyah. Como país, creo que debemos ser prudentes respecto a las relaciones con los otros países árabes.

¿Algún comentario final?

Me gustaría pedir comprensión hacia los sirios, incluyendo nuestros refugiados, frente a los clichés que nos pintan como radicales religiosos o como delincuentes. Hay de todo, como en cualquier país. Los fanáticos son una minoría. Los sirios normales temen y rechazan al ISIS. Somos una sociedad de gente emprendedora y bastante culta que busca reconstruir un país arrasado por cinco décadas de tiranía.

	Presidenta de la Fundación.
	Archivo.

José Antonio Kast, en La Moneda

La victoria de Kast abre una nueva etapa en Chile y se suma a la realidad política extremadamente polarizada que vive todo el subcontinente latinoamericano.

Samuel Toledo

La segunda vuelta presidencial chilena ha vuelto a poner sobre la mesa una de las grandes patologías de nuestro tiempo: la polarización extrema. El electorado se ha visto forzado a elegir entre una candidata comunista militante y un candidato de ultraderecha con un pasado personal y político que proyecta sombras evidentes sobre el futuro del país. Este fenómeno es global, pero adquiere una gravedad particular en los sistemas presidencialistas, donde la lógica del “todo o nada” convierte cada elección en una apuesta existencial. A diferencia de los regímenes parlamentarios, aquí no hay amortiguadores: el país entero queda en manos de una sola figura y de su proyecto ideológico.

Hay que decirlo con claridad: una victoria de Jeannette Jara habría sido un desastre de primer orden. Sus posiciones programáticas, mucho más radicales que las del presidente saliente Gabriel Boric, apuntaban a una profundización acelerada del intervencionismo, al debilitamiento de los contrapesos institucionales y a una deriva que habría colocado a Chile peligrosamente cerca de un autogolpe de extrema izquierda. La experiencia histórica chilena es elocuente: el proceso que culminó en el colapso del gobierno de

Allende no fue sólo fruto de factores externos o militares, sino también de una radicalización política que tensó hasta el límite el sistema. Repetir ese camino, en el contexto actual, habría sido temerario.

Sin embargo, que el comunismo haya sido evitado en las urnas no convierte automáticamente la alternativa en una opción saludable. La historia demuestra que, con frecuencia, el remedio ultraderechista resulta tan dañino como la enfermedad marxista que dice combatir. Chile ha elegido democráticamente ahora algo no tan distinto de lo que fue la dictadura de Pinochet, impuesta por la fuerza de las armas, pero no sería honesto ignorar las continuidades simbólicas y personales. José Antonio Kast proviene de una familia marcada por una relación ambigua —cuando no abiertamente complaciente— con el régimen militar,

y él mismo votó a favor de la continuidad de Pinochet en el referéndum de 1988. Estos hechos no son anécdotas: forman parte del bagaje moral y político del nuevo presidente.

Pinochet no fue modelo ni ejemplo de nada en términos políticos o humanos. Su legado está manchado por el asesinato sistemático de disidentes, la tortura, el exilio forzado y la anulación de libertades básicas. Esa herida sigue abierta en la memoria chilena y no admite relativizaciones. Sólo hay una sola lección positiva de aquel periodo: la apuesta por economistas liberales competentes que, con todas sus imperfecciones, impulsaron reformas estructurales decisivas, como la del sistema de pensiones, y sentaron las bases de décadas de prosperidad. Fuera de ese ámbito, el pinochetismo es un pozo de tiranía del que no debe beber hoy nadie.

Frente al histrionismo agresivo de otros líderes de la nueva derecha, Kast ha mostrado un tono sereno tras su victoria, ha pedido respeto para su oponente derrotada y ha cuidado las formas.

El mayor riesgo de la presidencia de Kast no está tanto en la política económica —donde cabe esperar cierta racionalidad— como en el terreno moral y de las libertades personales. El nuevo conservadurismo radicalizado comparte con la izquierda más dogmática una pulsión común: la tentación de la ingeniería social desde el Estado. La coerción cultural, moral o identitaria es insoportable venga de donde venga. Un Estado que se entromete de forma constante e invasiva en la vida privada, en nombre de valores supuestamente superiores, erosiona la libertad individual y acaba generando una sociedad asfixiante. Imponer los preceptos de una religión concreta es una infamia que Kast debe evitar a toda cosa, sean cuales sean las presiones que reciba hoy de quienes lo han llevado al Palacio de La Moneda.

Hay elementos que merecen una valoración positiva. Frente al histrionismo agresivo de otros líderes de la nueva derecha, Kast ha mostrado un tono sereno tras su victoria. Donde Javier Milei grita, insulta y gesticula con la carótida hinchada, Kast ha pedido respeto para su oponente derrotada y ha cuidado las formas durante toda la campaña electoral. Ese autocontrol, más propio de un presidente que de un agitador, no es un detalle menor en un contexto político global y latinoamericano tan inflamable como el que hoy nos están dando los extremistas de todos los colores. Precisamente en este sentido, es urgente que Kast adopte una posición sensata en sus alianzas internacionales. No es de recibo que desde la presidencia de un país se aliente el extremismo (ni marxista ni nacional-populista) en otros, como hace Milei cada vez que visita Europa. Ojalá Kast se junte en adelante con conservadores normales y no con aprendices de falangista.

Chile ha evitado, por ahora, el horror comunista al no elegir a Jara. Pero la historia no se detiene ahí. El desafío inmediato consiste en evitar igualmente el horror nacional-populista que con tanta frecuencia se deriva de un conservadurismo radical sin frenos.



José Antonio Kast, presidente electo de la República de Chile.

Moderar la presidencia de Kast —desde el Parlamento, la sociedad civil y las instituciones de todo tipo— será crucial para que Chile no se deslice por esa pendiente. La democracia chilena no necesita salvadores ideológicos, sino gobernantes contenidos, liberales en lo económico y respetuosos con las libertades personales por más que a ellos

les puedan disgustar. Lo contrario sería cambiar un abismo por otro.

	Colaborador de AVANCE.
	Archivo.

El futuro de la **energía** en España

Necesitamos apostar por las tecnologías más vanguardistas, como los reactores nucleares pequeños y modulares, para asegurar nuestro futuro energético.

Víctor Fernández

España se enfrenta a una encrucijada energética que marcará su competitividad, su sostenibilidad y su seguridad en las próximas décadas. El debate sobre el futuro energético debería estar guiado por la ciencia, la innovación tecnológica, el respeto a la libertad de elección de empresas y consumidores... pero, sin embargo, seguimos atrapados en un marco político dominado por la improvisación y la propaganda verde, subordinando la energía a estrategias de imagen electoral. En este contexto, la energía nuclear —una de las fuentes más limpias, estables y seguras que existen— no sólo permanece injustamente demonizada, sino que además está siendo activamente desmantelada. Y esto, lejos de ser un signo de progreso, constituye un grave error estratégico.

La realidad es sencilla: España necesita un sistema energético diversificado y robusto, basado en tecnologías que garanticen seguridad de suministro durante las 24 horas del día. Las renovables, pese a su enorme potencial y un progreso técnico admirable, siguen siendo intermitentes y dependen de condiciones meteorológicas incontrolables. El viento no sopla más porque lo diga el BOE, y el sol no brilla por más que lo desee un ministro. Sin un respaldo firme

y gestionable, apostar todo a las renovables sería similar a correr un maratón sin una pierna.

Pero la política energética española se ha construido al revés: primero el eslogan, luego el decreto, y finalmente la realidad. Las centrales nucleares, que aportan energía estable, barata y libre de emisiones, están siendo desmanteladas por decisión ideológica, no técnica. Mientras tanto, se subvencionan tecnologías que dependen de baterías que aún no existen a escala útil, se penaliza la inversión en infraestructuras de respaldo, se mantiene atrapado al consumidor entre tarifas reguladas y costes impuestos, y se simula un “éxito verde” que en realidad descansa en importar gas y electricidad nuclear francesa.

En este contexto, es imprescindible reivindicar la energía nuclear no como un dogma alternativo, sino como una pieza esencial para un sistema energético responsable. La evidencia cien-

tífica es clara: la nuclear es una de las fuentes con menor huella de carbono del planeta. Produce más electricidad con menos terreno, menos materiales y menos impacto ambiental que cualquier otra tecnología masiva.

Los estudios más recientes muestran que un sistema que combina renovables y nuclear es capaz de garantizar la descarbonización real sin sacrificar la estabilidad ni la competitividad. Países como Francia, Finlandia, Suecia o Canadá lo saben bien. España, por desgracia, parece haber renunciado a aprender de sus vecinos.

La energía nuclear moderna, en particular los reactores modulares pequeños (SMR) y las tecnologías de IV generación, abre además puertas que hace una década parecían ciencia ficción: centrales más seguras, más flexibles, más baratas de construir y capaces de reutilizar combustible que hoy consideramos residuo. Incluso las

Un país moderno no puede basar su energía exclusivamente en el viento y en la voluntad de un ministro.



tecnologías de fusión, pese a sus dificultades, están avanzando con una velocidad que hace veinte años habría sido impensable. ¿Cómo puede un país renunciar a esta revolución energética antes siquiera de estudiarla con rigor?

La respuesta es simple: porque el debate energético en España está capturado por la política. En vez de dejar que el conocimiento guíe las decisiones, se utiliza la energía como herramienta electoral. Los gobiernos anuncian cierres prematuros de centrales para satisfacer a minorías ideológicas, mientras ignoran tanto a los expertos como a los ingenieros. Se demoniza la nuclear con argumentos reciclados de los años ochenta, como si Chernóbil fueran el único marco posible para analizar esta tecnología, y como si las mejoras de seguridad no existieran.

Uno de los mayores problemas es que la energía en España no es un mercado libre, sino un sector fuerte-

mente intervenido. El Estado decide qué se puede construir, cuándo se debe cerrar, qué tecnologías son aceptables y cuáles deben ser penalizadas. Se asignan subvenciones millonarias a empresas que dependen más del dinero público que del consumidor, se distorsiona el precio real de la electricidad, y se impide que la competencia determine qué tecnologías son realmente viables. En un sistema así, la eficiencia no importa: sólo importa alinearse con el regulador.

Esto es exactamente lo contrario de lo que debería hacerse. La transición energética debe estar basada en innovación, competencia y libertad para invertir en las tecnologías que demuestran viabilidad. El papel del Estado debería limitarse a garantizar reglas claras, un marco donde empresas y consumidores puedan elegir. La elección de tecnologías energéticas no debe depender del capricho ministerial,

sino de la evidencia técnica y del mercado. Si España quiere un futuro energético próspero, necesita abandonar el dogmatismo anti-nuclear y apostar por un mix realista: renovables en su máximo potencial, sí, pero respaldadas por una base nuclear firme. Esto permitiría reducir el gas sin comprometer la seguridad de suministro, estabilizar los precios, descarbonizar con rigor y mantener una industria competitiva.

No se trata de elegir entre nuclear o renovables: se trata de evitar que la política nos obligue a elegir mal. Un país moderno no puede basar su energía exclusivamente en el viento y en la voluntad de un ministro.

	Colaborador de AVANCE.
	AdriaVidal.

Continúa el atraco a nuestros autónomos

España, bajo el gobierno de coalición de socialistas y extrema izquierda, ha habilitado medidas aún más draconianas contra los trabajadores autónomos.

Juan José Toral

Soy trabajador por cuenta propia. Autónomo. Empresario. Por eso no me limitaré a presentar los datos: los interpretaré y daré mi opinión, como autónomo y como economista.

El Gobierno presentó la propuesta inicial de cuotas para autónomos de 2026 en la mesa de diálogo social alrededor del 13 de octubre de 2025. Esa propuesta fue posteriormente rectificada, pero los datos que allí se presentaron fueron los siguientes:

- Autónomos que ganen hasta 670€:
- En 2026 pagarán 217€.
 - En 2027 subirán a 235€.
 - En 2028 acabarán pagando 252€.

Es decir, hasta un 40% de tu facturación destinada únicamente al pago de la cuota. En cualquier otro contexto sonaría a broma, pero fue la realidad que allí se expuso. Ya no hablamos de "gravar a los más ricos", sino de saquear a quienes menos tienen, a quienes empiezan, a quienes emprenden.

Autónomos que ganen 1.900€ (el salario mediano en España):

- En 2026 pagarán 403€.
- En 2027, 435€.
- En 2028, 468€.

Y para los autónomos con mayores ingresos (más de 6.000€ mensuales):

- En 2026 pasarán a pagar 796€.
- En 2027, 1.002€.
- En 2028, 1.123€.

Como anticipamos, hubo una rectificación posterior debido al revuelo y el rechazo generalizado. Según esta corrección:

- Los que menos ganen no verán aumentos en su cuota.
- Los que cobren alrededor del salario mediano pagarán un 1,5% más (aprox. 375,55€ en lugar de los 403€ establecidos inicialmente).
- Y quienes superen los 6.000€ mensuales abonarán 604,75€ en lugar de 796€.

¿Buenas noticias? No. Porque es-

tas cifras son transitorias, un puente, un trámite hasta llegar al destino final: 2032, año en el cual todos los autónomos pagarán en función de sus ingresos reales. O, mejor dicho, de sus facturaciones reales. Poco que celebrar.

En 2032 las cuotas serán:

- Entre 1.116€ y 1.300€ → 398€.
- Entre 1.850€ y 2.030€ → 621€.
- Más de 4.050€ → 1.375€.

¿Resultado? España registra hoy el menor porcentaje de autónomos de toda la serie histórica: 14%. Un dato grave. Y más grave aún que ciertos sectores políticos lo celebren como "progreso" y "avance económico". Es falso.

Los autónomos no desaparecen porque la economía mejore: desaparecen porque los están expulsando. Por espolio fiscal, por burocracia, por sanciones, por agotamiento. No es la

No se busca "gravar a los más ricos", sino saquear a quienes menos tienen, a quienes empiezan, a quienes emprenden.

victoria del progreso, es la victoria del saqueo. Como ya hemos explicado en artículos anteriores en esta misma revista, el sistema de pensiones es teóricamente y prácticamente insostenible bajo el modelo de reparto actual. Asumámoslo como hecho: no habrá una correspondencia futura entre lo que se paga hoy y lo que se reci-

rá mañana. Por tanto, el aumento de cuotas no es una aportación solidaria: es un expolio inmediato para cuadrar cuentas de corto plazo.

Y como autónomo estoy harto porque no somos cajeros automáticos del Estado. No trabajamos doce horas al día para sostener estructuras políticas que no sostienen a nadie. Y no quería

callarme mientras nos roban a plena luz del día y a cara descubierta.

	Colaborador de AVANCE.
	Roman Samborskyi.

En realidad, todo el trabajo debería ser autónomo

La división entre empresarios y trabajadores asalariados es una reliquia conceptual de otra época. Nació en un contexto industrial en el que los medios de producción eran máquinas, fábricas y capital físico, y en el que podía entenderse que tenía sentido distinguir entre quien poseía esos medios y quien sólo aportaba su fuerza de trabajo. Ese mundo ha desaparecido, pero el marco mental sigue ahí, especialmente en el discurso de la izquierda. Hoy, el principal medio de producción es la mente humana: el conocimiento, la capacidad técnica, la creatividad y el criterio profesional. Y esa mente es propiedad del trabajador. Desde este punto de partida, la visión marxista de una sociedad escindida entre capitalistas y proletarios deja de tener sentido analítico y moral.

Sin embargo, seguimos sosteniendo una sociedad laboral profundamente desigual. Una parte de la población trabaja para el Estado o para grandes compañías bajo un régimen de estabilidad, protección y privilegios normativos. Otra parte —autónomos, profesionales *freelance*, pequeños empresarios— asume riesgos constantes, jornadas más largas y



una relación mucho más directa entre esfuerzo e ingresos, generalmente en condiciones más duras y peor reconocidas. Esto es así en todas partes, pero el diferencial es aún peor en España. Durante décadas, los sindicatos y la izquierda política han logrado marginar el trabajo autónomo y perjudicar a la pyme, porque a ellos lo que les conviene es la gran empresa sindicalizada y en la cama con el poder político. Nada está más cerca del *crony capitalism* estatizado que el sindicalismo "de clase".

Y, sin embargo, son los autónomos quienes mantienen a flote la economía española. Los autónomos no son un problema a corregir, sino un modelo a reivindicar. No necesitan parecerse más a los asalariados: es el trabajo asalariado el que debería avanzar hacia mayores cotas de autonomía, responsabilidad y correspondencia entre valor creado y retribución. En realidad, todos somos empresarios. Algunos, simplemente, trabajan para un único cliente y en sus instalaciones. Pero hoy, con tu mente y un portátil... ya puedes ser empresario o, lo que es lo mismo, trabajador autónomo.

Juan Pina

VII Congreso del Partido Libertario

Con más de dieciséis años de trayectoria política y decenas de procesos electorales a sus espaldas, el P-LIB celebró su séptimo congreso para definir su futuro.

Leonardo Campos

El pasado sábado 29 de noviembre se celebró en Madrid el VII Congreso del Partido Libertario (P-LIB), que comenzó con la constitución de la mesa conformada por el secretario, presidente y vicepresidenta de la misma. Al quedar constituida la mesa, se presentó por parte de la secretaría de comunicación un informe detallado sobre la actividad que el partido ha realizado desde el último congreso realizado tres años atrás en el año 2022. Así mismo se presentó también un informe sobre la estrategia de comunicación llevada a cabo durante el mismo período haciendo hincapié en los errores cometidos anteriormente y en las decisiones adoptadas para corregirlos y fortalecer así la comunicación del partido. Se presentó por parte del Secretario General un último informe detallado de la situación económica del partido, detallando los ingresos y las reservas del mismo. Al concluir la presentación de dichos informes, se pasó a la elección de los órganos del partido, la Comisión Permanente y el resto del Comité Ejecutivo Federal —máximo órgano del partido, después del Congreso—. Al no haber más candidaturas a la Comisión Permanente que puestos a cubrir, se proclamó electa la única

candidatura presentada quedando reelegido para la Secretaría General Jorge Martín, y quedando elegida para el cargo de Presidenta la hasta entonces Secretaria de Comunicación, Evaluna Cabello. Quedaron también proclamados los cinco candidatos restantes de la Comisión Permanente. Sin embargo al haber más candidatos que puestos a cubrir para el resto de vacantes al Comité Ejecutivo Federal se procedió a votación, quedando electos los 8 candidatos más votados. Tras ser elegidos todos los cargos correspondientes, el congreso procedió a debatir diversas propuestas jurídicas entre las que se encuentra el encargo del Congreso al Comité Ejecutivo Federal entrante un posible cambio de nombre del partido, una reforma de los estatutos en relación a las alianzas y programas electorales y por último reformas del Programa Político Marco en relación a la eutanasia, las patentes farmacéuti-

cas y sobre el sistema penitenciario. Se debatió también una propuesta sobre una posible reforma del sistema electoral para impulsar un sistema de voto ponderado, propuesta que tras ser debatida por el Congreso fue retirada por el impulsor de la misma. Para finalizar, los asistentes realizaron un debate general en el cual se analizó entre otras cosas el peligro que supone para la democracia liberal el avance del populismo colectivista que avanza por izquierda y por derecha.

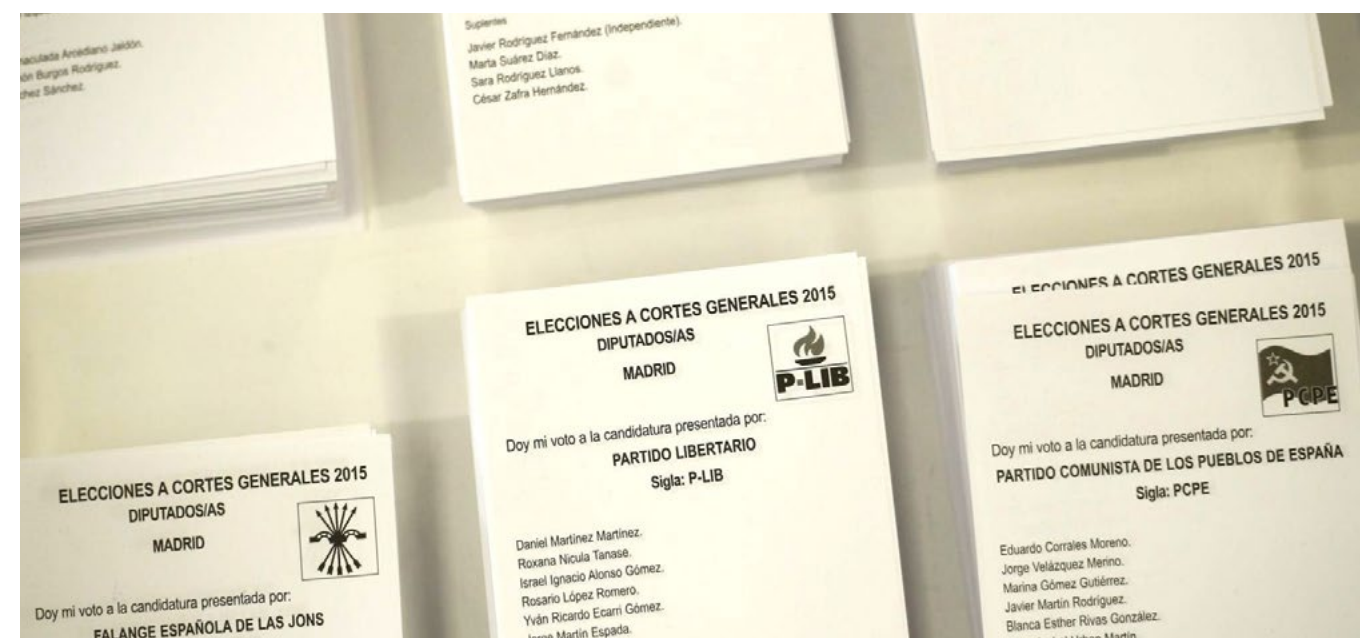
Muchos pensarán que tras dieciséis años de actividad política, siete congresos e infinidad de candidaturas presentadas, haber logrado tan sólo un concejal es una pérdida de tiempo continuar con un proyecto aparentemente fracasado y con un recorrido que no lleva a ninguna parte. Hay que tener en cuenta sin embargo que el Partido Libertario se encuentra en un proceso de renovación y de cambio

La política es un juego de suma cero. La haces o te la hacen. Y no puede haber políticas libertarias sin políticos libertarios.

en la estrategia de crecimiento, priorizando las candidaturas municipales para crecer de abajo hacia arriba, al revés de como se había hecho históricamente presentando todo tipo de candidaturas aún cuando ello implicase el desgaste que supone la recogida de firmas y que afecta a la posterior campaña. Es legítimo pensar que la estrategia adecuada sería aquella en la cual los libertarios nos centrásemos únicamente en una batalla intelectual para, desde la sociedad civil combatir las ideas socialdemócratas predominantes con adornos comunistas a un

para que la segunda pueda darse. Hay que dar ambas batallas por igual, pues antes de llegar a las instituciones es necesario que exista una base social de personas que crean en las ideas de la libertad de manera firme, de lo contrario en caso de que una mayoría socialdemócrata decidiera apoyar por hartazgo una opción libertaria sin entender ni compartir realmente las ideas provocaría que los proyectos llevados a cabo por el gobierno libertario fueran revertidas inmediatamente después de las elecciones por no contar con un apoyo significativo por par-

que realizar un doble esfuerzo, por un lado lograr hacer de las ideas libertarias las mayoritarias dentro del partido (algo que no sería necesario cuando se trabaja desde un partido que ya es libertario) y luchar contra el aparato de ese mismo partido que hará todo lo posible por evitar que tal mayoría tome el control del mismo excluyendo si hiciera falta a los militantes disidentes. Me gustaría para finalizar invitar a los lectores de AVANCE que quieran ver avanzar las ideas de la libertad en España a contribuir al crecimiento de la única fuerza política que defiende



lado y nacionalistas al otro y que eso influyera en los partidos actualmente existentes sin militar en los mismos. Hay quienes incluso plantean la posibilidad de tratar de entrar directamente en las grandes fuerzas políticas para hacer activismo libertario desde dentro e influir en las decisiones tomadas por las mismas en las instituciones. Ambas propuestas plantean sin embargo diferentes objeciones que merecen ser señaladas. En primer lugar es necesario resaltar que la batalla intelectual (que no cultural) no es que sea una alternativa a la batalla política sino que es un pilar fundamental

de la población. En segundo lugar hay que tener en cuenta que los partidos actualmente existentes en España (a excepción del Partido Libertario) funcionan de forma vertical sin opción real a que un militante cualquiera pueda formar parte de la directiva por utilizar un sistema electoral cerrado que no permite el debate interno. Además de esto, para que fuera posible que una mayoría libertaria tomase el control de un partido mayoritario sería necesario que existiese una masa de personas que compartiera las ideas dentro de ese partido, algo que no tendría sentido pues para lograr tal objetivo habría

la libertad en todas sus vertientes sin excepciones ni excusas. Dar la batalla (intelectual, política o ambas) o no es una decisión que debe tomar cada uno, pero debe hacerlo teniendo en cuenta que la política es un juego de suma cero en el cual la haces o te la hacen y que no puede haber políticas libertarias sin políticos libertarios.

	Colaborador de AVANCE.
	Archivo.

Perspectiva económica global para 2026

El autor considera probable que en este nuevo año veamos una prolongación del equilibrio precario que ha definido a la economía global desde la Gran Recesión.

Magda Palacios

El mundo entra en 2026 con la sensación de que lo peor queda atrás. La inflación retrocede desde sus picos del covid, los bancos centrales comienzan a bajar tipos y los mercados celebran el retorno del crédito más asequible. La narrativa oficial describe un aterrizaje suave, una economía global que vuelve a expandirse sin sobresaltos. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalización persisten tensiones estructurales acumuladas durante años. No vivimos el final de un ciclo problemático, sino una extensión condicionada por expectativas que podrían volverse frágiles.

La estabilidad actual está construida sobre una enorme montaña de deuda. El endeudamiento público y privado aumenta con cada crisis, y la solución siempre es la misma: bajar tipos, inyectar liquidez y financiar desequilibrios que no se corrigen realmente, solo se aplazan. La clave para entender 2026 no es preguntarse si habrá crecimiento —probablemente sí— sino qué tan dependiente es ese crecimiento de estímulos que ya muestran señales de agotamiento.

Europa es un buen ejemplo de esta realidad dual. La inflación ha cedido lo

suficiente para que el Banco Central Europeo haya iniciado una serie de recortes prudentes, buscando aliviar la presión sobre los gobiernos más endeudados y estimular la actividad. Pero la recuperación del crédito es débil. Las pymes siguen teniendo dificultades para financiarse, la productividad apenas avanza y el gasto público continúa actuando como sostén principal de la demanda. El resultado es una economía que se estabiliza sin recomponer sus bases. Los tipos permanecen por encima de los niveles ultra bajos de la última década y eso implica un coste real creciente para países con deudas superiores al 100% del PIB, como España o Italia. Europa puede seguir administrando sus desequilibrios, pero el margen para hacerlo sin reformas reales se reduce cada año.

En Estados Unidos, el relato siempre es más luminoso. La inversión en

inteligencia artificial, infraestructuras estratégicas y relocalización industrial proyecta un ciclo expansivo de largo alcance. Esa apuesta se ha convertido en motor y en narrativa: la economía del futuro ya estaría tomando forma en EE. UU. y no en otro lugar. Pero el mercado laboral empieza a contar una historia distinta. Tras dos años de fortaleza extraordinaria, la creación de empleo se modera y el desempleo ha comenzado a subir, lo que ha llevado a la Reserva Federal a bajar tipos antes de lo previsto. Ya no se trata de controlar una inflación desbocada, sino de evitar que el enfriamiento del empleo descarrile la demanda interna.

Al mismo tiempo, la posición fiscal estadounidense se vuelve cada vez más incómoda. El país mantiene déficits enormes incluso en años de crecimiento. La financiación de ese desequilibrio se ha apoyado durante décadas

en el privilegio del dólar como moneda de reserva global. Pero la geopolítica se está reordenando. Numerosas economías impulsan sistemas de pagos alternativos y tratan de reducir su exposición al dólar. Esa lenta erosión de la hegemonía monetaria implica que Estados Unidos tendrá que convencer más y con mejores condiciones a quienes compran su deuda. Y cuando

una crisis inmediata, pero sí crea presiones inflacionarias latentes y limita la mejora de la productividad, que es el verdadero motor del crecimiento real.

Mientras tanto, la inversión en grandes proyectos —desde semiconductores hasta inteligencia artificial— parece sostener el entusiasmo del mercado. No obstante, muchas de esas inversiones solo son viables bajo

te. Y es posible que así ocurra durante un tiempo más. Pero esta estabilidad no debe confundirse con solidez. Una economía que depende del crédito fácil para sostenerse no corrige sus desequilibrios, los perpetúa.

Lo que se podría esperar este año no será necesariamente un colapso, sino más probablemente una prolongación del equilibrio precario que ha



el coste del endeudamiento sube, la ilusión de sostenibilidad se vuelve más difícil de mantener.

A ello se suma un cambio estructural en el comercio mundial. La globalización ha perdido su brújula de eficiencia y ha abrazado la lógica del interés nacional. Producir cerca, asegurar el suministro y subvencionar industrias estratégicas son ahora prioridades que encarecen la actividad económica. Lo que antes se consideraba una virtud del mercado global —el ajuste competitivo de precios— se ve ahora como una vulnerabilidad. Esa transición hacia un mundo menos integrado no genera

condiciones financieras extremadamente favorables. Los años de dinero barato crean la ilusión de que toda innovación genera valor por el simple hecho de existir. Con tipos algo más altos y un crecimiento menos exuberante, se revela qué proyectos pueden realmente sostenerse en un entorno de capital escaso.

No hay un estallido inminente a la vista. El sistema ha demostrado una notable capacidad para posponer ajustes incómodos. Cada descenso de tipos suaviza temporalmente la presión, renovando la expectativa de que todo puede continuar indefinidamente.

definido la economía global desde la Gran Crisis Financiera. En apariencia, el sistema funciona. En esencia, depende de que todos sigan creyendo que funcionará. Esa es la verdadera condición que marcará 2026: un crecimiento sostenido no por su fortaleza, sino por la capacidad de seguir estirando la cuerda sin que se rompa.



Colaboradora de AVANCE.



Golden Dayz.

La radical importancia de la calidad regulatoria

La mala calidad de la regulación, muchas veces confusa y cambiante, se une a la sobreabundancia de reglas generando una pesadilla que daña la economía.

Bosco Aspe

La regulación, presente en todas las economías, genera graves distorsiones en el proceso de coordinación social. Sin embargo, una regulación compleja y ambigua tiene un efecto negativo amplificado sobre dicho proceso, incrementando los costes de cumplimiento y favoreciendo la concentración económica. Por lo tanto, la calidad regulatoria – cómo se diseña, redacta y comunica una norma – es tan importante como su propio contenido.

Una regulación es considerada de calidad cuando es clara (define con precisión los objetivos), concisa (evita ambigüedades) y accesible (sus destinatarios pueden comprenderla sin necesidad de expertos).

La ambigüedad regulatoria impone costes reales. Cuando una norma no define claramente qué está permitido o prohibido, los actores económicos deben invertir recursos adicionales en interpretación legal, consultoría y defensa ante posibles sanciones. Estos costes recaen principalmente sobre empresas pequeñas y medianas, que carecen de departamentos legales especializados y cuentan con menos recursos, obstruyendo la competencia.

El sector laboral europeo ha experimentado esto con las normativas sobre teletrabajo implementadas post-pandemia. En España, el Tribunal Supremo ha dictado múltiples sentencias contradictorias en 2024-2025 (STS 959/2024, STS 267/2025) sobre cláusulas de teletrabajo. Definiciones vagas sobre qué constituye una "jornada laboral" y dónde terminan las responsabilidades del empleador generaron miles de litigios.

En Francia, la ambigüedad de la normativa que obligaba a teletrabajar "en todas las actividades que lo permitían", lo cual generó sanciones de hasta 50.000 euros a empresas, pero sin criterios claros para determinar qué actividades realmente permitían el teletrabajo.

Los requerimientos de reporte ESG sobre sostenibilidad ilustran otro caso. La Directiva CSRD obligará a más de

50.000 empresas europeas a reportar información ESG, pero definiciones vagas sobre qué es exactamente "sostenibilidad" y cuáles indicadores son vinculantes obligan a empresas a invertir recursos significativos en descifrar la ley para asegurar su cumplimiento. En España, el 95% de las grandes empresas aumentaron la inversión en sostenibilidad en 2023, con costes de cumplimiento que según Deloitte superan los 2.600 millones de euros en digitalización solo para adaptarse. La ambigüedad no detuvo el cumplimiento, pero aumentó el gasto en consultoría legal.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es otro ejemplo ilustrativo de este problema. Hasta 2024, las multas totales en Europa ascendieron a 4.480 millones de euros. Irlanda encabeza el ranking por importe (3.507 millones de euros), mientras

Estamos en la era del sobrecumplimiento defensivo. Las empresas exceden lo requerido por miedo a sanciones, desviando recursos.

España lidera en número de sanciones (1.191). Las multas específicas muestran inconsistencias: LinkedIn (Irlanda) recibió 310 millones de euros, Meta Platforms 251 millones, mientras en España, Generali fue multada con 5 millones, Caixabank con 3 millones y Endesa con 6,1 millones. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso 281 sanciones en 2024 por 35,6 millones de euros, con multas que oscilan entre 600 y 25.000 euros para el 72% de pequeñas empresas y autónomos. Estas sanciones fueron en gran parte impuestas debido a la poca claridad de la ley. Términos como "interés legítimo" generan interpretaciones tan variadas que las multas son inconsistentes según país y autoridad.

La claridad regulatoria tiene un impacto económico medible. Una regulación bien redactada reduce los costes de cumplimiento porque las empresas necesitan menos asesoría legal para interpretarla. Permite planificación a largo plazo, los ejecutivos saben exactamente qué esperar. Normas confusas desalientan a startups y pequeñas empresas, que no pueden costear abogados especializados en interpretaciones complejas. En cambio, grandes corporaciones con departamentos legales pueden absorber esta incertidumbre, lo cual favorece la concentración económica.

Una consecuencia directa de esto es el sobrecumplimiento defensivo. Las empresas exceden lo requerido por miedo a sanciones, desviando recursos que podrían ser utilizados para otros propósitos más útiles. Representa un desperdicio de recursos.

La disuasión regulatoria es otra consecuencia que puede provocar distorsiones graves en la economía. Los emprendedores evitan sectores altamente regulados aunque podrían innovar significativamente, porque la incertidumbre es demasiado costosa. Se pierden oportunidades de crecimiento y desarrollo que podrían ser evitadas si la regulación fuese fácilmente accesible y comprensible.



Sin embargo, aunque mejorar la calidad regulatoria puede convertir una regulación deficiente en una efectiva, esto no resuelve el problema fundamental de la intervención estatal. Una norma clara y concisa sigue siendo una restricción a la coordinación espontánea del mercado. La ambigüedad es un factor que obstaculiza todavía más el proceso, pero la pretensión de que la planificación central puede mejorar los resultados económicos sigue siendo errónea.

Incluso la regulación mejor redactada trae consigo costes como oportunidades de innovación no exploradas, combinaciones de recursos no realizadas o formas de cooperación económica sofocadas por el marco normativo predeterminado. La claridad regulatoria es por lo tanto una forma de reducir ese coste lo máximo posible, pero no lo elimina.

Mientras exista regulación, debe ser clara –con definiciones precisas–,

concisa –sin tecnicismos innecesarios–, transparente en su elaboración, coherente, evaluable y proporcional. La calidad regulatoria importa, reduce los costes económicos que siempre conlleva la regulación y genera más seguridad. Pero mejorar la calidad de la regulación no debe confundirse con aceptar más regulación. El objetivo debe ser doble, exigir que cualquier norma existente sea comprensible y coherente, pero también trabajar para que el alcance de la intervención estatal sea significativamente menor. Una economía próspera no sólo necesita una regulación clara, sino que necesita menos regulación.

	Chief Economist de la Fundación.
	Andrii Yalanskyi.

Doctrina Monroe, doctrina Trump

La visión jurídico-internacional de la administración Trump guarda más similitudes con la vieja doctrina Monroe que con el aislacionismo anti-neocon que predicó.

Teresa Carmona

Durante décadas, una de las críticas más recurrentes a la política exterior de los Estados Unidos fue que seguía anclada en la llamada doctrina Monroe. Formulada en 1823, su principio básico era sencillo: "América para los americanos". En su versión original, pretendía impedir nuevas injerencias europeas en el continente e impulsar la independencia de los países que aún permanecían colonizados, si bien rezumaba una fuerte componente de búsqueda de oportunidades de hegemonía regional para Washington en el Hemisferio Occidental. En sus reinterpretaciones posteriores, sirvió para justificar una posición de supremacía regional de Estados Unidos y su derecho a intervenir —directa o indirectamente— en todo el continente americano. Pero con el tiempo, esa lógica se expandió más allá del mismo. La presencia estadounidense en el Pacífico, con la intervención en Filipinas desde 1898 como ejemplo temprano y duradero, fue leída por muchos como una extensión imperial de la doctrina. Tras la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, la política de contención, las alianzas militares y la proyección global de poder consolidaron esa imagen. Desde ciertos sectores

libertarios y desde buena parte de la izquierda estadounidense, se criticó ese papel hegemónico y se etiquetó como "neoconservadores" a quienes defendían unos Estados Unidos fuertes, activos y garantes de un orden internacional liberal.

Donald Trump se presentó como la negación de todo eso. Su retórica inicial fue claramente aislacionista, alineada con la teoría del "America first" y por lo tanto rechazando guerras exteriores con un fuerte desdén hacia sus aliados por ser débiles o por "no pagar lo suficiente" y con una crítica frontal al intervencionismo. Parecía el fin del consenso *neocon*. Sin embargo, en menos de un año de su segundo mandato, cuando ya no tiene incentivos electorales y puede actuar con mayor libertad, Trump ha ido perfilando una doctrina geopolítica que se aleja del aislacionismo clásico y se acerca, paradójicamente, a una versión cruda y desacomplejada de la Monroe.

Al despreciar el Derecho internacional basado en normas, Trump sustituye principios generales por acuerdos entre potencias.

Por un lado, busca desentenderse de los compromisos multilaterales: cuestiona la defensa colectiva de la OTAN, relativiza las obligaciones con Europa y muestra un desprecio abierto por los organismos globales. Pero, al mismo tiempo, se arroga un supuesto derecho a intervenir en Panamá, a decidir el futuro de Venezuela, a reivindicar Groenlandia, a fantasear con la anexión de Canadá o a repartirse zonas de influencia en Ucrania o Gaza con otras potencias, a matar en alta mar a presuntos narcos e incluso a irrumpir con dureza en procesos electorales de América Latina o de Europa. Todo esto no es una retirada del mundo, como la que cierta medida protagonizó en su primer mandato, sino una especie de regreso a la dinámica de superpotencia, copiando parcialmente las formas de Vladimir Putin. Se trata ahora de una selección unilateral de qué partes del mundo le importan y qué reglas les impondrá.

Este giro no es sólo retórico. Documentos estratégicos recientes del entorno de la Casa Blanca y del Pentágono, así como declaraciones de Trump, Marco Rubio o Pete Hegseth, apuntan a una visión abiertamente transaccional del orden internacional: Estados Unidos, no como garante de normas comunes, sino como potencia que negocia esferas de influencia, exige lealtad a cambio de protección y se reserva la última palabra cuando sus intereses están en juego. Desde el punto de vista del Derecho internacional, el contraste es especialmente inquietante. El orden surgido tras 1945 se basó en dos pilares: el multilateralismo y un sistema de normas comunes, codificado a partir de la Carta de las Naciones Unidas, que limita el uso de la fuerza, protege la integridad territorial y promueve la resolución pacífica de controversias. Incluso cuando ese orden se violó, su existencia ofrecía un marco jurídico para denunciar abusos y exigir responsabilidades.

La nueva "doctrina Trump" erosiona ese marco de manera directa. Al despreciar el Derecho internacional basado en normas, sustituye principios generales por acuerdos *ad hoc* entre grandes potencias, ninguneando con marcado desprecio a los demás actores del panorama global, cuyo papel debe reducirse prácticamente al de Estados vasallos de uno de los grandes. En otras palabras, "might is right", lo que cuenta es la fuerza. La seguridad deja de ser un bien colectivo para convertirse en un producto negociable. La soberanía de los Estados pequeños pasa a depender de su utilidad estratégica para los grandes. El multilateralismo se ve reemplazado por una diplomacia de la fuerza bruta donde lo jurídico no sólo es secundario frente a lo conveniente, sino que directamente es un estorbo.

Las consecuencias no son abstractas. Si la defensa colectiva se relativiza, la prohibición del uso de la fuerza pierde efectividad. Si los tratados se conciben como contratos revocables por conveniencia política, la seguridad jurídica internacional se resiente. Si las



organizaciones multilaterales son despreciadas sistemáticamente, el espacio para la cooperación se reduce y el conflicto se normaliza.

En ese sentido, la doctrina Trump no es simplemente una vuelta a la doctrina Monroe, sino su radicalización en un mundo mucho más interdependiente y jurídicamente estructurado. La Monroe operaba en un sistema internacional rudimentario, pero la doctrina Trump actúa contra un entramado de normas que, con todos sus defectos, ha mitigado el caos durante casi ocho décadas.

Si la principal potencia cuestiona las reglas invita a otros a hacer lo mismo, cada uno a su nivel y en su área de micro-hegemonía. Y si el Derecho se convierte en una opción y no en un marco obligatorio, lo que queda es *bullying* puro y duro como único argumento de las relaciones internacionales.



Colaboradora de AVANCE.



James Monroe, óleo de Gilbert Stuart, hacia 1823.

El sector del juego es legítimo

Es deplorable la hipocresía con la que el Ejecutivo y la normativa tratan el juego en España. Hay una pinza moralista entre conservadores e izquierda contra este sector.

Juan Francisco Abellán

España mantiene con el juego una relación hipócrita: se tolera, se consume masivamente y se grava con entusiasmo, pero se estigmatiza como si fuera una anomalía moral. Esa tensión cultural se ha traducido en una sobre-regulación creciente, en obstáculos prácticos para abrir nuevos establecimientos y en un diseño institucional que, en determinados productos, roza el monopolio. Las loterías de ámbito estatal quedan reservadas por ley al operador estatal, con la peculiaridad de que la única excepción privada sea precisamente una entidad concreta, la ONCE, en detrimento de cualquier otra, lo que sin duda constituye un disparate jurídico y un privilegio intolerable.

Este marco no es neutral. Crea una asimetría evidente: el juego “público” goza de aprobación legal, capilaridad comercial y una legitimidad social que el juego privado no tiene, pese a estar sometido a licencias, inspecciones, restricciones de todo tipo y una agresión reputacional permanente. Y todo ello, además, mientras la Administración se reserva el papel de árbitro y de jugador principal. Hay, detrás de esta configuración, una pinza ideológica extraña pero real. Por un lado, la derecha más conservadora suele rechazar el juego

por motivos moralistas, con raíces culturales y religiosas: el juego como vicio, como desorden, como amenaza a la familia. Por otro, la izquierda tiende a rechazarlo por motivos ideológicos: desconfía de la libertad de jugar del mismo modo que desconfía del lucro en otras actividades, y busca corregir conductas individuales mediante prohibiciones, distancias, vetos y tutela administrativa. Para la derecha el juego es vicio liberal, para la izquierda es una tara capitalista. Resultado: al sector del juego le llueven críticas desde ambos colectivismos, y la política pública sobre esta actividad se construye más desde la sospecha que desde la evidencia.

Sin embargo, el juego es una industria legítima y, a estas alturas, estructural. Según estimaciones sectoriales ampliamente citadas, el “juego real” en España se mueve en el entorno de los once mil millones de euros anuales si se agregan loterías públicas, juego

presencial de entretenimiento y juego online. No hablamos de un rincón marginal de la economía, sino de una actividad con demanda sostenida, fiscalidad intensa y un impacto relevante en empleo directo e indirecto. También aquí hay asimetría: mientras el juego público se presenta como “solidario” o “tradicional”, el privado se convierte en el chivo expiatorio perfecto para campañas morales de bajo coste.

Esa hostilidad cultural tiene efectos concretos. En numerosas ciudades y comunidades se han aprobado o intentado aprobar moratorias, distancias obligatorias a “espacios sensibles” y vetos casi totales a nuevas licencias. Algunas medidas podrán estar justificadas, pero el problema es el sesgo: se legisla a menudo con una lógica de castigo simbólico, no de proporcionalidad. La propia jurisprudencia reciente ha recordado que la protección de menores y vulnerables no legitima

El Estado se reserva los mejores nichos de mercado de este sector, e impone al juego privado una penitencia regulatoria.



cualquier restricción: debe acreditarse la necesidad, la coherencia con el marco competencial y la proporcionalidad, porque también existe libertad de empresa y reglas de mercado que no pueden desaparecer por decreto. Y a todo esto se suma el cerco regulatorio sobre la publicidad del juego privado. España tiene restricciones muy severas para la comunicación comercial, con el argumento de que la captación agresiva aumenta el riesgo de ludopatía. Pero el Estado no se aplica a sí mismo ese estándar, y así SELAE —y la ONCE— pueden hacer la publicidad que quieran.

Toda esta regulación anti-juego ha acabado generando efectos secundarios: menos transparencia, más concentración en operadores grandes y un incentivo para desplazar el consumo hacia canales ilegales. Como pasa con la droga o la prostitución, prohibir sólo crea más problemas porque el remedio regulatorio suele ser peor que la enfermedad. La paradoja alcanza su punto máximo con el monopolio parcial de loterías y quinielas. Si el juego es “malo”, ¿por qué el Estado lo explota y lo publicita con normalidad? Y si es

legítimo, ¿por qué se reserva por ley a dos operadores designados, impidiendo la competencia y la diversidad? Lo que queda patente es el fin recaudatorio y de control político de nuestra normativa, hecha por ingenieros sociales ávidos de cobrar impuestos.

La consecuencia es un ecosistema del juego con menor inversión, más inseguridad regulatoria, menos innovación y mayor dependencia de lo que el poder político considere aceptable cada año. Un ejemplo emblemático fue el fracaso del proyecto Eurovegas, con la inversión millonaria que Las Vegas Sands quiso impulsar en Madrid y que terminó abandonando al chocar con las exigencias del marco jurídico y político español. La izquierda moralista lo celebró como una victoria, pero fue un síntoma de un país que desconfía de ciertas industrias por viejos tics culturales, incluso cuando podrían generar empleo, turismo y actividad.

Defender el sector del juego no implica negar sus riesgos. Debe impedirse el acceso de menores, reforzarse la verificación de identidad en el juego online, y proteger a quienes padecen lu-

dopatía mediante registros de autoexclusión eficaces, controles de acceso y protocolos con trazabilidad real. Pero hay que sustituir la saña ideológica y la moralina por regulación inteligente. Menos prohibición teatral y más mecanismos que funcionen. Menos “cordón sanitario” contra un sector y más competencia limpia, transparencia fiscal y protección efectiva del vulnerable.

El juego es legítimo. Lo ilegítimo es que el Estado se reserve los mejores nichos del mercado, imponga al privado una penitencia regulatoria y, a la vez, se presente como guardián moral de una actividad de la que vive. Si queremos una política pública adulta, hará falta abandonar la pinza conservadora-progresista y tratar el juego como lo que es: una industria que debe estar regulada, sí, pero sin prejuicio, sin privilegios y sin monopolios de conveniencia.

	Colaborador de AVANCE.
	Aerial Mike.

A debate

¿HAY QUE RECONOCER A LAS ETNIAS INDÍGENAS UN MARCO LEGAL DISTINTO?

Esta vez nos ocupamos de una controversia muy viva, especialmente en América Latina, como siempre desde dos ópticas liberales contrapuestas.

A FAVOR CON MATICES: "Sí a la coexistencia de marcos jurídicos", por Antonia González.

EN CONTRA: "La pluralidad étnica no es excusa", por Pedro Muñoz.

Sí a la coexistencia de marcos jurídicos

La autora sostiene que el pluralismo jurídico es una de las expresiones legítimas y razonables de la multietnicidad en aquellos países donde ésta es determinante.

Antonia González

Uno de los debates más complejos del constitucionalismo contemporáneo gira en torno a si las comunidades indígenas deben disponer de marcos jurídicos propios. No se trata de una cuestión marginal: afecta a países tan distintos como Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, Colombia, Chile o los Estados nórdicos, y pone en tensión principios centrales del liberalismo político. Pero sostengo que esa diferenciación jurídica no sólo es compatible con el liberalismo, sino que puede ser una de sus expresiones

más coherentes ante la diversidad etnocultural. La objeción liberal clásica argumenta que reconocer ordenamientos jurídicos específicos rompe la igualdad ante la ley y puede encerrar a los individuos en una "cárcel jurídica" por su mero nacimiento, obligándolos a vivir bajo derechos y deberes distintos por pertenecer a una comunidad. Desde esa perspectiva, el pluralismo jurídico sería una concesión comunitarista incompatible con la universalidad de los derechos individuales. Pero esta crítica parte de una premisa discutible: que el liberalismo exige uniformidad normativa. Histó-

ricamente, no ha sido así. Los liberales no sólo no temen la pluralidad de ordenamientos en competencia, sino que la han defendido activamente cuando se articula sobre bases territoriales. El cantonalismo suizo, el federalismo clásico, la descentralización profunda o incluso la competencia regulatoria entre Estados de una misma alianza o bloque, son mecanismos que limitan el poder central y acercan la norma a los gobernados, y los liberales habitualmente los defendemos. Si aceptamos esa pluralidad para territorios definidos por la Historia, la geografía o los pactos políticos,

resulta incoherente rechazarla cuando el fundamento es una identidad indígena asentada en un territorio concreto y generalmente con anterioridad al nacimiento del propio Estado.

Desde esta óptica, los marcos jurídicos indígenas son, ante todo, una forma de autogobierno. Y el autogobierno es una noción profundamente liberal: supone que una comunidad política puede darse normas propias dentro de un marco general, sin que ello implique necesariamente secesión ni ruptura del orden constitucional. Canadá lo ha entendido así al reconocer amplias competencias a las llamadas *First Nations*. Estados Unidos lo ha hecho al admitir la soberanía limitada de las reservas; y varios países latinoamericanos, al constitucionalizar la jurisdicción indígena en materia civil, familiar o comunitaria.

Ahora bien, que la diferenciación jurídica sea legítima no significa que sea ilimitada. Desde una posición liberal, esta pluralización debe someterse a condiciones claras. La primera es el respeto estricto a los Derechos Humanos básicos: integridad física, libertad personal, igualdad de género, prohibición de tratos crueles y garantías procesales elementales. Ningún ordenamiento,

por muy ancestral que sea, puede justificar su vulneración.

La segunda condición es la territorialidad. Los marcos jurídicos indígenas deben adscribirse a territorios definidos, no tanto a la condición de origen étnico de las personas allí donde se encuentren. Esto evita la creación de estatutos personales rígidos (ya resulten privilegiadores o penalizadores) y asegura que todo el mundo quede sometido a un mismo sistema jurídico, preservando así la igualdad ante la ley dentro de ese espacio.

La tercera condición es precisamente la igualdad interna entre locales y forasteros: el ordenamiento indígena no puede establecer regímenes distintos para quienes viven bajo él (o simplemente están de visita) en función de su pertenencia o no a una tribu. El Derecho propio regula un territorio, no una casta. De lo contrario, la crítica que formulan los liberales contrarios a la pluralidad jurídica sería plenamente válida.

Un problema adicional, y no menor, es el de la democracia. Muchos sistemas tradicionales de gobierno indígena descansan en consejos de ancianos, linajes o estructuras excluyentes por sexo, edad o estatus. Desde un libe-

ralismo coherente, estos mecanismos deben adaptarse a la modernidad democrática. Reconocer jurisdicción propia no implica suspender el sufragio activo ni tampoco el pasivo, ni aceptar estructuras de poder cerradas. El desafío consiste en compatibilizar formas culturales propias con principios democráticos básicos, algo que varios países ya están intentando mediante reformas internas pactadas.

En última instancia, el criterio decisivo debe ser siempre el individuo. En caso de conflicto, prevalece su condición superior como titular de derechos y de soberanía personal. Pero esa primacía no impide —más bien permite— acomodar la diversidad étnica mediante marcos legales distintos en concurrencia dentro de un mismo Estado. Un liberalismo seguro de sí mismo no necesita imponer uniformidades: puede gobernar la diversidad sin miedo, siempre que tenga claros sus límites.



Colaboradora de AVANCE.



Archivo.

A FAVOR CON MATICES

"La primacía del individuo no impide habilitar marcos legales específicos para estas comunidades".

Antonia González



EN CONTRA

"Una persona no debería quedar sometida a un marco legal distinto por su simple nacimiento".

Pedro Muñoz

La pluralidad étnica no es excusa

El autor sostiene que la autonomía debe ser territorial y no étnica, y que la diferente identidad no genera diferentes —menores o mayores— derechos para nadie.

Pedro Muñoz

Una de las decisiones más delicadas de cualquier comunidad política es determinar qué puede variar y qué no dentro de su marco jurídico. Los territorios pueden organizarse de formas muy distintas, admitir amplios márgenes de autogobierno e incluso redefinir su relación con una comunidad política mayor. Lo que no puede variar sin consecuencias profundas es el núcleo que define una jurisdicción: la protección de los derechos fundamentales de quienes viven en ella.

Desde esta perspectiva, merece una reflexión crítica la idea de establecer regímenes jurídicos especiales para determinados grupos humanos en función de su identidad cultural o de su modo de vida aislado. La cuestión no es cultural ni sentimental, sino institucional: la jurisdicción no puede basarse en la identidad sin erosionar el principio de igualdad ante la ley.

Las comunidades políticas se estructuran sobre territorios habitados por individuos. Las identidades —étnicas, culturales o lingüísticas— forman parte de la vida social, pero no pueden convertirse en el criterio que determine qué derechos se aplican y cuáles no. Cuando el origen pasa a definir la jurisdicción, la ley deja de ser común y se transforma en

un mosaico de excepciones. Y una vez abierta esa puerta, el marco jurídico deja de cumplir su función principal: ofrecer la misma protección básica a todos.

Esto no implica rechazar el autogobierno. Un territorio puede organizarse con amplias competencias propias si así lo decide su población. Incluso puede aspirar a separarse políticamente. Pero esa autonomía es territorial, no étnica, y tiene un límite claro: no puede afectar a la protección de la vida, la libertad y la propiedad. Esas garantías no son negociables ni transferibles en función del origen cultural.

El caso del pueblo sami en Finlandia ilustra bien esta distinción. Los samis cuentan con instituciones propias para gestionar su lengua, su cultura y sus modos de vida tradicionales. El Sámediggi, su parlamento, está reconocido constitucionalmente y ejerce competencias relevantes en estos ámbitos. Sin embargo, no existe una jurisdicción penal sami ni un sistema alternativo de garantías básicas. Un ciudadano sami está sometido al mismo marco jurídico fundamental que cualquier otro ciudadano finlandés. La cultura se protege sin convertirse en frontera legal.

Algo similar ocurre en Canadá. Los acuerdos de autogobierno indígena se articulan sobre territorios concretos y

competencias limitadas. Su diseño y resultados son discutidos, pero hay una línea que no se cruza: no existen estándares distintos de protección penal o de derechos fundamentales en función de la identidad. El reconocimiento cultural no equivale a soberanía jurídica plena sobre lo esencial.

Los problemas aparecen cuando esta distinción se diluye. En algunos países, el reconocimiento de sistemas normativos propios vinculados al origen —como determinadas “justicias indígenas” o regímenes de derecho consuetudinario— ha generado situaciones en las que una persona queda sometida a un marco legal no por elección, sino por nacimiento. La identidad deja de ser un hecho cultural y pasa a ser una categoría jurídica obligatoria. En ese punto, la excepción deja de ser una forma de respeto y se convierte en una imposición.

El debate adquiere un perfil distinto cuando se trata de pueblos no contactados. Comunidades como los Mashco Piro, en la Amazonia peruana, o los sentineleses, en las islas Andamán, viven en aislamiento de hecho desde hace generaciones. Respetar ese aislamiento frente a intrusiones externas es razonable. Convertirlo en aislamiento jurídico absoluto, no. El

A FAVOR CON MATICES

"Los marcos jurídicos indígenas son una forma de autogobierno. Y el autogobierno es una noción profundamente liberal que no implica secesión ni ruptura del orden constitucional".

Antonia González



EN CONTRA

"Proteger una cultura no exige suspender el marco común de derechos, sino garantizar que quienes la integran no queden jurídicamente atrapados en ella. La identidad no debe ser una categoría legal obligatoria".

Pedro Muñoz

hecho de que una comunidad haya vivido históricamente al margen no justifica que la jurisdicción establezca espacios donde la protección básica frente a la violencia o la coacción desaparece por completo.

Conviene ser precisos. No se trata de suponer que los individuos de etnias aisladas desean otro modo de vida ni de reclamar intervención permanente. El argumento es más elemental: una jurisdicción no puede crear zonas donde, por definición, nadie pueda reclamar protección alguna. El aislamiento puede ser un hecho pero no debe convertirse en una excepción legal estructural.

Las consecuencias de estas excepciones no son teóricas. En Brasil, la retirada efectiva de la autoridad estatal de

amplias zonas indígenas —presentada como respeto a la autonomía— facilitó durante años la entrada de minería ilegal y redes criminales en territorios habitados por comunidades extremadamente vulnerables, como la yanomami. No se trató de un fallo de políticas públicas accesorias, sino de algo más básico: la ausencia de protección frente a la violencia organizada. Allí donde la jurisdicción se diluye, la fuerza impone su propia ley.

Nada de esto implica negar la historia de abusos sufrida por muchos pueblos indígenas ni el valor de sus culturas. Pero la reparación no puede consistir en sustituir una forma de subordinación por otra. Proteger una cultura no exige suspender el marco común de derechos,

sino garantizar que quienes la integran no queden jurídicamente atrapados en ella. La identidad debe ser una pertenencia cultural libre, no una categoría legal obligatoria.

La cuestión, en el fondo, es sencilla. Si dos personas viven bajo una misma jurisdicción, no puede haber diferencias sustanciales en lo fundamental. La identidad no puede determinar el alcance de la protección jurídica. El aislamiento de hecho no justifica el aislamiento legal.

	Colaborador de AVANCE.
	Archivo.

Y Hindenburg le entregó la cancillería

Hace este mes noventa y tres años, un presidente débil y anciano nombró a Hitler primer ministro de Alemania abriendo así la peor caja de Pandora de la Historia.

Luisa Márquez

El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. No accedió al poder mediante un golpe de Estado ni por una insurrección armada, sino a través de un nombramiento formal, constitucional y aparentemente controlado. Precisamente por eso, aquel día marcó uno de los mayores fracasos políticos del siglo XX: el momento en que una democracia fuertemente debilitada, acosada por el más abyecto colectivismo populista, entregó el gobierno a quien se proponía destruirla desde dentro e instaurar un régimen antiliberal.

Para comprender cómo fue posible, conviene alejarse de la imagen irreal de un asalto híbrido al poder. No hubo tal. El poder se lo dio la sociedad a sabiendas, moleste hoy a quien moleste esta aseveración. El ascenso de Hitler fue el resultado de una combinación de crisis económica, empuje electoral del movimiento nacionalsocialista, cálculo político erróneo de las fuerzas normales y fatiga institucional desde la misma presidencia del país. La República de Weimar soportaba la hiperinflación desde los años veinte, el desempleo masivo y una polarización creciente. En ese contexto, el Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo

se convirtió en la primera fuerza electoral en 1932, pero sin mayoría absoluta y con una base social aún insuficiente para gobernar en solitario.

Y en ese contexto, el papel del presidente Paul von Hindenburg fue decisivo. Anciano, cansado y cada vez más desconectado de la realidad política, Hindenburg desconfiaba personalmente de Hitler, a quien despreciaba porque veía en él a un agitador vulgar. No entendió que precisamente es ese perfil, el de orador tosco y zafio que insulta y exige y grita mucho, el que mayor éxito tiene siempre entre las masas empobrecidas e incultas. Hoy tenemos varios ejemplos. Pero Hindenburg también desconfiaba del parlamentarismo y veía con acritud el bloqueo institucional. Alemania había encadenado gobiernos débiles, sostenidos por decretos de emergencia, y la presidencia se había convertido *de facto* en el eje del poder.

El presidente no comprendió que no estaba nombrando a un canciller más, sino abriendo la puerta a un proyecto totalitario.

Fue en ese marco donde se produjo el error fatal. Las élites conservadoras —políticas, económicas y militares— creyeron que podían utilizar a Hitler para estabilizar el sistema y neutralizar a la izquierda. Figuras como Franz von Papen convencieron a Hindenburg de que Hitler podía ser “domesticado” dentro de un gabinete controlado, con sólo tres ministros nacionalsocialistas y el resto procedentes del *establishment* tradicional. El cálculo era sencillo y profundamente equivocado: darle la cancillería para “quemarlo” políticamente, mientras el poder real seguiría en manos de otros. No comprendieron que en esa composición siempre, invariablemente, el el populista quien utiliza a los representantes del mainstream, jamás al revés. Y de esto también tenemos bastantes ejemplos actuales.

Así se fraguó el desastre. Hitler no necesitaba controlar todo el Estado



Hitler saluda a las masas nada más ser nombrado canciller. A su lado, Hermann Göring. Detrás (a la derecha) Rudolph Hess.

desde el primer día; le bastaba con ocupar el centro del poder ejecutivo y aprovechar las grietas legales del sistema. En pocas semanas, el incendio del Reichstag le vino como anillo al dedo para decretar la suspensión de derechos fundamentales y promulgar la Ley Habilitante, vaciando de contenido la Constitución. Todo ello se hizo, formalmente, dentro de la legalidad, o al menos bajo su apariencia.

La debilidad de Hindenburg fue no comprender que no estaba nombrando a un canciller más, sino abriendo la puerta a un proyecto totalitario. Su firma legitimó un proceso que ya no pudo controlar. Cuando murió en 1934, el cargo presidencial desapareció y fue absorbido por el propio Hitler sin resistencia efectiva. Donde había habido un presidente y un canciller (primer ministro), hubo desde entonces un *Führer* (“guía”) todopoderoso. Jamás hubo en el régimen nacionalsocialista nada parecido a contrapesos de poder.

Europa, por su parte, observó los acontecimientos con una mezcla de distancia, ingenuidad y autoengaño. Muchos gobiernos interpretaron el

nuevo gabinete alemán como otro experimento autoritario más, comparable a los que ya existían en otros países, al haberse debilitado el aprecio a la institucionalidad liberal heredada de la Ilustración. Se subestimó la naturaleza rabiosamente ideológica del nacionalsocialismo, su vocación expansionista y su desprecio radical por el orden internacional. Los líderes de las demás potencias erraron gravemente al pensar que Alemania, una vez reintegrada en la normalidad diplomática, actuaría como un Estado racional más. Mucho se ha escrito sobre las injustas condiciones de Versalles, pero lo cierto es que para el nacionalsocialismo fueron una excusa magnífica, inmejorable.

El error de diagnóstico europeo sobre Hitler tuvo consecuencias inmediatas. La falta de reacción temprana le permitió consolidar su poder interno, rearmar el país y preparar una política exterior agresiva que acabaría por arrastrar a Europa a la guerra. El odio populismo, legitimado por las urnas y aceptado por las élites, se convirtió en una maquinaria de destrucción institucional y geopolítica.

El 30 de enero de 1933 fue el punto de no retorno. Fue el día en que la política de apaciguamiento empezó dentro de casa, ejercida por el mismísimo presidente de la República. Fue el día en que triunfó la torpe y fútil estrategia de “gestionar el populismo desde dentro del sistema”, que pronto se reveló falsa. Y ahora, noventa y tres años después, vemos por todo Occidente cómo se repite este mismo error en vez de aplastar sin contemplaciones ese peligroso populismo que de nuevo nos amenaza con planes ferozmente iliberales. Entender aquel nombramiento es esencial para comprender lo que ocurre cuando las instituciones se vacían, las masas incurrir de nuevo en buscar salvadores y las élites calculan mal y, en su arrogancia, apuestan por populistas. A veces, al populismo se le invita a pasar. A veces lo alimentan sus futuras víctimas.



Colaboradora de AVANCE.



Archivo.

La segunda novela de Ruthardt, ya disponible

La Fundación apuesta de nuevo por el reconocido autor de *El clamoroso silencio* de Max Grund, cuya segunda novela se une a la oferta de AVANCE Libros.

Saúl Fernández

Ya está aquí la nueva y fascinante novela del escritor alemán Ralf M. Ruthardt, autor de *El clamoroso silencio* de Max Grund (Avance Libros para la Libertad, 2025). La Fundación, a través de su sello editorial, apuesta por segunda vez por la prosa ágil y directa de este liberal de nuestros días que vehicula como nadie nuestras ideas a través de sus personajes. Entre éstos, el inolvidable Max Grund reaparece secundariamente en esta nueva trama independiente de la primera obra de ficción de Ruthardt. Si en su primera novela se ocupó de la censura y de la peor de las censuras, que es la autocensura, en esta ocasión Ruthardt se adentra en la corrupción existente alrededor de esa nueva religión secular en la que se ha convertido el ecologismo más radical, un milenarismo que frecuentemente cuestiona o pone en riesgo la continuidad misma de nuestra especie.

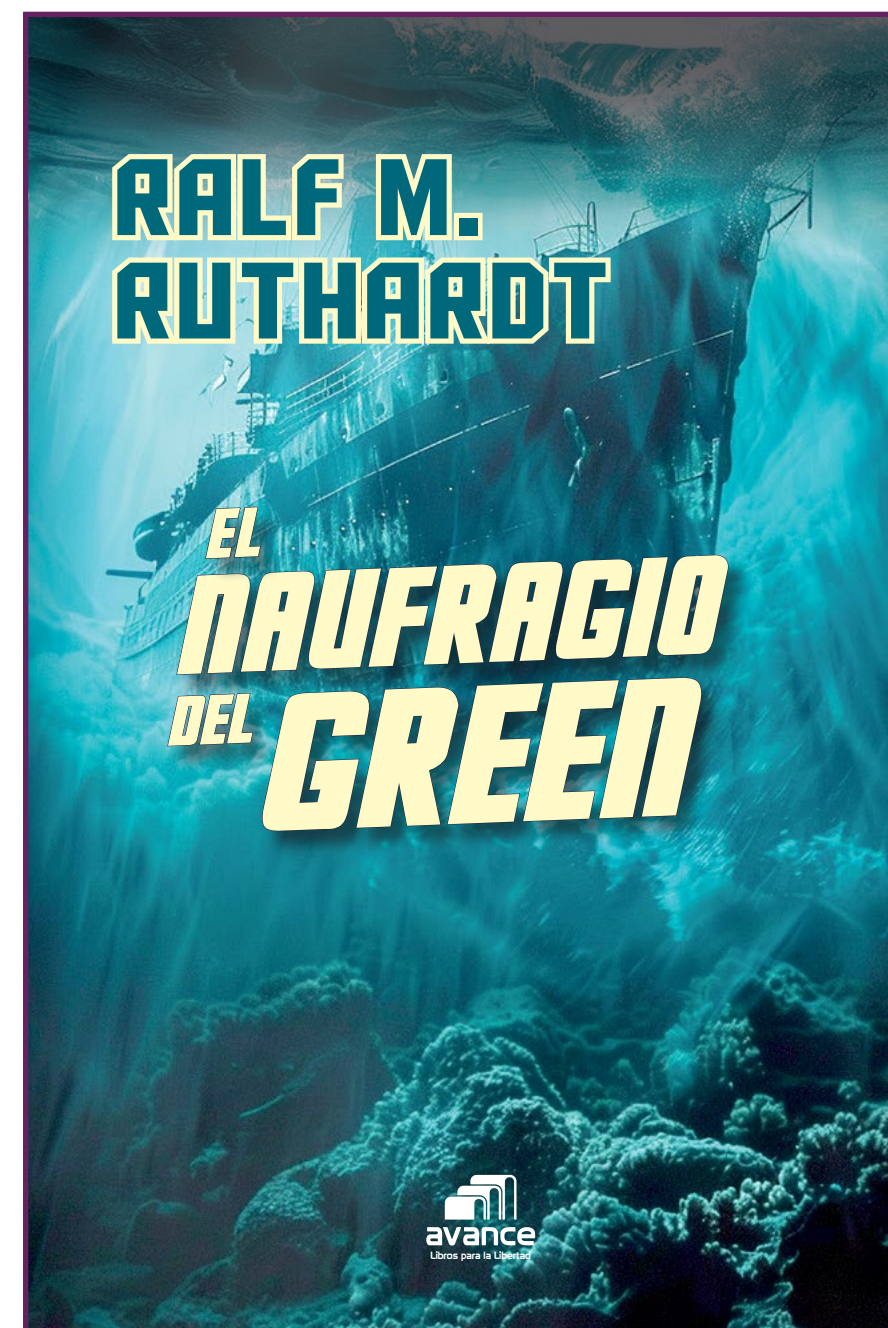
El GREEN es un barco de pasajeros y de orientación principalmente turística que surca las aguas del norte de Alemania. Durante uno de sus recorridos, pequeñas tensiones inofensivas terminan desencadenando esta intriga ideológica, política y personal. Cuando una tormenta de fuerza 9 golpea el barco, la

red de seguridad de Dennis Jung —joven director ejecutivo de una ONG climática— empieza a deshilacharse. Descubre que ni él ni quienes le rodean son exactamente quienes aparentan ser.

A partir del naufragio material y moral, la historia viaja atrás en el tiempo para reconstruir cómo un joven brillante pero ambicioso, asciende meteóricamente en el brumoso ecosistema



Ralf M. Ruthardt, autor de *El naufragio del GREEN*.



de las ONG europeas. Allí descubre alianzas opacas, campañas diseñadas para moldear la opinión pública y una maquinaria perversa que amalgama idealismo, intereses económicos y manipulación emocional.

Con un estilo ágil y una pluma ácida, Ralf M. Ruthardt dibuja la anatomía de un sistema donde el relato pesa más que los hechos y las cruzadas filantrópicas

terminan metamorfoseadas en oscuros negocios. El naufragio del GREEN es una novela incisiva, incómoda y profundamente actual, que expone las grietas morales del activismo moderno y nos mueve a cuestionar la consistencia de nuestros propios principios.

La obra, cuyo prólogo firman Philipp Bagus y el traductor de la obra al castellano, Erick Behar, es una lectura

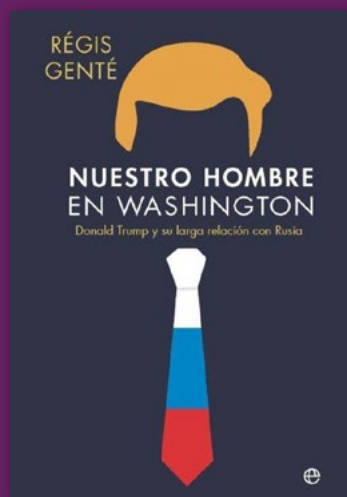
Con un estilo ágil y una pluma ácida, Ruthardt bucea en la supuesta filantropía ecológica que oculta intereses espurios.

rápida, un auténtico *page turner* que no es fácil dejar de leer, como tampoco es fácil hacerlo de manera superficial. Al contrario, la lectura de *El naufragio del GREEN* provoca en el lector, sobre todo en el de extracción liberal-libertaria, profundas reflexiones sobre el papel que hoy juegan en nuestro mundo las ONG, a las que con tanta frecuencia se les cae la ene. Igualmente, es imposible sustraerse a revalorar causas como la naturalista o a podnerar negativamente a cuantos, incapaces de triunfar en la sociedad por la vía del emprendimiento o del ejercicio profesional, buscan hacerlo por los vericuetos de la política colectivista y de los movimientos sociales supuestamente independientes pero anclados siempre en agendas cuya víctima es invariablemente la libertad individual.

Un libro, en suma, que no puede faltar en la biblioteca de ningún amante de la Libertad ni de ninguna persona preocupada por su ya inocultable y dramático retroceso en todo el mundo.

	Colaborador de AVANCE.
	979-13-991061-7-6
	AVANCE Libros para la Libertad
	EUR 22,00 136 páginas

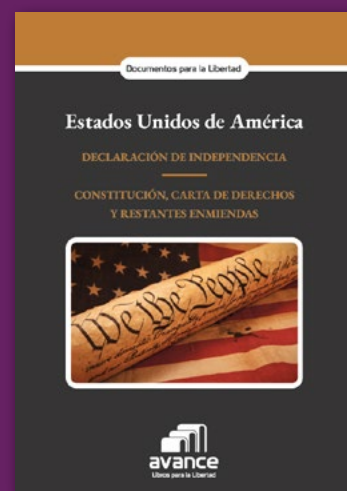
PARA TU BIBLIOTECA



Nuestro hombre en Washington de Régis Genté

Corresponsal de *France 24*, *Le Figaro* y otros medios franceses en el espacio postsoviético, Genté es un especialista en el entramado de poder constituido en torno a Vladimir Putin. En este revelador ensayo, el autor galo organiza detenidamente la constelación de indicios que apuntan, ya de manera absolutamente incontrovertible, a la estrechísima conexión entre Donald Trump y la oligarquía rusa heredera de la antigua *nomenklatura* soviética, hoy ultraconservadora, y de las redes de *siloviki* y ex agentes del KGB. Trump, vinculado desde los ochenta.

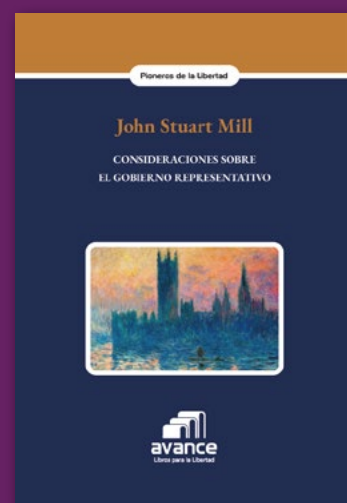
Editorial: La Esfera de los Libros | ISBN: 9788410941809 | 240 páginas.
Precio: EUR 17,95 en la Casa del Libro (en la edición PDF pulsa aquí)



Documentos fundacionales de los Estados Unidos de América

El volumen recoge la Declaración de Independencia que firmaron el 4 de julio de 1776 las trece colonias norteamericanas hartas del maltrato constante y de la brutal exacción fiscal que les infligía la lejana Corona británica; y la Constitución que doce años después se dieron para establecer el primer gobierno realmente limitado en la Historia humana moderna. El tercer gran documento fundacional es la conocida "carta de derechos", que se recoge también junto a las restantes enmiendas a la Constitución aún vigente.

Editorial: AVANCE | ISBN: 978-84-129385-8-6 | 92 páginas
Precio: EUR 10,00 en la tienda de AVANCE (en la edición PDF pulsa aquí)



Consideraciones sobre el gobierno representativo, de John Stuart Mill

Publicado por primera vez en 1861, este libro es una de las obras políticas más influyentes de John Stuart Mill (1806-1873), pensador clave del liberalismo clásico. En este ensayo, Mill reflexiona sobre las condiciones necesarias para un gobierno verdaderamente representativo y examina sus virtudes, límites y peligros. Con un enfoque profundamente racionalista y comprometido con la libertad individual, defiende la participación activa del ciudadano y una opinión pública ilustrada como contrapeso crucial al poder político.

Editorial: AVANCE | ISBN: 979-13-990431-2-9 | 360 páginas
Precio: EUR 16,00 en la tienda de AVANCE (en la edición PDF pulsa aquí)



Un futuro de igualitarismo extremo
que quizá ya estemos gestando hoy.
Una novela imprescindible.



Recíbe este libro en pocos días.
Compra altamente securizada en:
<https://tienda.fundalib.org>

Analizamos la calidad normativa de la UE

Esta nueva publicación de la Fundación junto con Epicenter, ya disponible íntegramente en el sitio web, impulsa una normativa más propicia a la competitividad.

Carolina Cuesta

En noviembre, la Fundación para el Avance de la Libertad, en colaboración con el European Policy Information Center (EPICENTER), presentó el informe “Índice de calidad normativa de la Unión Europea: Evaluación de los Principios de Mejora de la Legislación en las Directivas de la UE 2022-2024”. Este trabajo constituye la primera evaluación integral y sistemática del proceso legislativo europeo en el actual ciclo institucional y ofrece una visión inédita sobre cómo se diseñan, justifican y aplican las directivas comunitarias.

En el centro del estudio se sitúa el Índice de Calidad Normativa de la UE (EU-RQI), un instrumento analítico formado por cincuenta indicadores que permiten medir de forma rigurosa y comparada aspectos esenciales de

la buena regulación: la claridad y coherencia de los textos jurídicos, su alineación con las prioridades estratégicas de la Unión, la correcta aplicación del principio de subsidiariedad, la robustez de las evaluaciones de impacto, la calidad de los procesos de consulta pública y la solidez de los mecanismos de implementación. El resultado es un diagnóstico exhaustivo que ilumina las fortalezas y las debilidades de la legislación europea reciente y plantea preguntas de gran relevancia para el futuro de la gobernanza comunitaria.

El equipo multidisciplinar e internacional de expertos que ha elaborado este ambicioso estudio subraya la necesidad urgente de simplificar el lenguaje jurídico para hacer la normativa comunitaria más accesible y efectiva. Con una puntuación global media de 66,9 sobre 100, el EU-RQI evidencia fortalezas en la iniciativa legislativa, pero también persistentes deficiencias que podrían erosionar la confianza ciudadana, además de elevar los costes de implementación en los Estados miembros.

En este contexto, las evaluaciones de impacto —que son un instrumento clave para garantizar que las decisiones estén fundamentadas en evidencias y sean proporcionadas—

muestran un rendimiento irregular. Si bien la mayoría abarca algún tipo de análisis económico, únicamente una porción de ellas integra de manera sistemática datos acerca de impactos medioambientales, efectos sobre pymes, competitividad o costes administrativos. Por otra parte, se han observado amplias diferencias entre ámbitos políticos, lo cual produce inconsistencia metodológica y complica la comparabilidad de las políticas públicas europeas.

En conclusión, el estudio demuestra que la UE cuenta con un marco avanzado de “mejor regulación”, pero persisten brechas entre principios y práctica. Mejorar la calidad normativa es esencial para promover la gobernanza inclusiva a la vez que se fomenta la innovación y la equidad. Este índice allana el camino para reformas que generen un marco regulatorio más racional, claro y eficaz, capaz de revitalizar la competitividad europea sin añadir cargas innecesarias.

	Colaboradora de AVANCE.
	Archivo.

ÍNDICE DE CALIDAD NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA:

EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE MEJORA DE LA LEGISLACIÓN EN LAS DIRECTIVAS DE LA UE 2022-2024

Noviembre de 2025



Ya disponible en www.fundalib.org/estudios

Preparados para un 2026 muy olímpico

La Fundación para el Avance de la Libertad, tras el éxito de la primera edición española de la Olimpiada de Economía, calienta motores para organizar la segunda.

Clara Camacho

Las Olimpiadas de Economía celebran su segunda edición y lo hacen con cifras que confirman la consolidación del proyecto y el creciente interés por la educación económica entre los jóvenes. Con más de ciento setenta centros educativos y más de 1.500 estudiantes inscritos (datos actualizados a 15 de diciembre), el proyecto entra en su fase decisiva con todo preparado para el inicio de la competición.

El plazo de inscripción para los alumnos permanecerá abierto hasta el 15 de enero, mientras que la Ronda Escolar —primera fase oficial de la competición— se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, en el horario que cada centro elija entre las 8:00 y 14:00, facilitando así la participación sin interferir en la dinámica lectiva. Una de las principales novedades de esta segunda edición ha sido la incorporación de webinars formativos. Estas sesiones, impartidas por profesionales en activo del sector económico y financiero, han abordado temas de máxima actualidad y utilidad práctica, como la sostenibilidad del sistema de pensiones, el futuro del dinero y la inversión indexada a largo plazo.

Más allá de servir como preparación para la competición, estos encuentros

han aportado herramientas clave para la vida personal y académica de los participantes, acercando la economía real a las aulas y fomentando el pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables. Esta edición destaca especialmente por la amplia representación

territorial. Andalucía vuelve a ser una de las comunidades con mayor participación, reafirmando el papel activo de los profesores, que mantienen una comunicación constante y coordinada para impulsar este proyecto educativo. Madrid consolida su presencia



Imposición de la medalla de oro a la ganadora de 2025, Esther Pérez, a cargo de la Presidenta de la Fundación, Roxana Nicula. En la página siguiente, los estudiantes de la ronda nacional de la Olimpiada, celebrada en Madrid.



Olimpiadas de Economía

c o b a s
asset management

con más de ciento treinta estudiantes inscritos, mientras que Cataluña mantiene una participación destacada. Una de las grandes novedades es la incorporación de Valencia, que el año pasado no estuvo representada y que en esta edición ya cuenta con más de

treinta estudiantes, reflejando la expansión progresiva del proyecto por todo el territorio nacional. La segunda edición de las Olimpiadas de Economía vuelve a contar con Schiller International University como sede de la Ronda Nacional, reafirmando una colabora-

ción que ya fue un éxito en la primera edición y que aporta un entorno académico internacional de primer nivel. Asimismo, se anuncia la incorporación de Cobas Asset Management como impulsor de las Olimpiadas, un apoyo estratégico que refuerza el compromiso del proyecto con una educación económica rigurosa, actual y conectada con la realidad profesional.



Directora de Desarrollo y Comunicación de la Fundación.



Archivo.

La Fundación intensifica su impulso a la continuidad de la energía nuclear



La Fundación cerró el año 2025 con una intensa labor de reuniones con alcaldes de las localidades afectadas por el cierre de centrales nucleares que pretende el gobierno de coalición entre el PSOE y la extrema izquierda, así como con todo tipo de colectivos afectados y organizaciones de la sociedad civil. La Fundación intensificó también sus encuentros con grupos parlamentarios de las cámaras autonómicas donde podrían producirse los cierres perseguidos por el gobierno de Pedro Sánchez. Así, la Presidenta Roxana Nicula y otros representantes de Fundalib se han desplazado a Barcelona, Toledo y otras ciudades para reunirse con grupos parlamentarios de partidos como Junts o el PP. La Fundación ha distribuido un informe de argumentación y textos para proposiciones no de ley contra el cierre.

Arriba, los representantes de la Fundación Roxana Nicula (Presidenta), Bosco Aspe (Chief Economist) y Kevin Fernández-Cosials (experto externo en materia energética) posan en la escalinata del Parlament de Catalunya tras la reunión mantenida con Junts. Sobre estas líneas, encuentro con el Portavoz de Política Energética de Junts, Jordi Munell (diputado por Girona) a la que asistió también la diputada Irene Negre.

En la imagen de abajo, Roxana Nicula prepara en Toledo la proposición no de ley (PNL) contra el cierre de las centrales nucleares con Santiago Lucas-Torres, diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha.



La Fundación, en el encuentro liberal de La Haya



La Presidenta de la Fundación; Roxana Nicula, visitó La Haya en los últimos días de noviembre para participar en el encuentro de dirigentes liberales de todo el continente europeo, los Liberal Partnership Days. Esta reunión anual a instancias del European Liberal Forum fue organizada en esta ocasión por el partido liberal holandés VVD, uno de los dos que compiten en los Países Bajos por el espacio liberal, y que en conjunto obtuvieron unos resultados excelentes en las recientes elecciones legislativas. En la imagen, Roxana Nicula junto al eurodiputado Malik Azmani de esa formación política, miembro de la Comisión de Derechos Civiles, Justicia e Interior de la eurocámara.

La participación de Fundalib se enmarca en los esfuerzos del *think tank* español por impulsar en la UE varias líneas de actuación, y especialmente la liberalización de la vivienda como medida de choque para la emancipación de los jóvenes, el trabajo autónomo, la integración bancaria y financiera de los migrantes o la apuesta de Europa por la energía nuclear y, en particular, por los SMRs. La Fundación es uno de los *think tanks* españoles con mayor vocación y proyección internacional, miembro de varias redes europeas y globales de instituciones similares, siempre en el marco de las ideas de la Libertad.

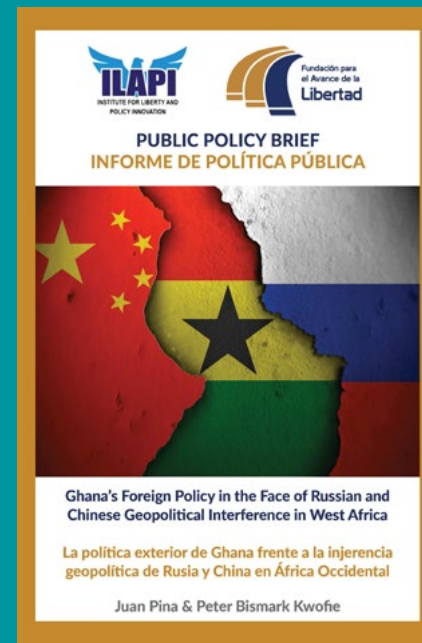
Una visión liberal de Europa en 2050

El secretario general de la Fundación, Juan Pina, participó por tercera vez en la cumbre de *think tanks*, partidos políticos y expertos convocada en Bruselas por la Fundación Friedrich Naumann para reflexionar sobre la Europa que los liberales desean para 2050. A veinticinco años de la fecha objetivo, hay motivos para el optimismo pero también nubarrones que amenazan tormenta. Juan Pina expuso la necesidad de que Europa impulse los Derechos Humanos, las libertades individuales y el libre mercado frente a la realidad ya evidente de que las demás grandes potencias, incluyendo ahora a los Estados Unidos de Trump, actúan contra esos valores y además promueven el fin del proyecto europeo y nuestro sometimiento en el marco de una nueva Guerra Fría.



La Fundación e ILAPI emiten un detallado *policy brief* geopolítico para Ghana

En el marco de su cooperación con los *think tanks* liberales de Ghana, la Fundación ha participado en la investigación y elaboración de un extenso y detallado informe de políticas públicas que tiene por objeto analizar la actual encrucijada geopolítica a la que se enfrenta ese país africano y proponer un curso de acción que afiance su apuesta por la democracia liberal y por la plena inserción en Occidente. Ghana es un país de raíz cultural y jurídica anglosajona rodeado de países de tradición y vinculación francesa. La expulsión de Francia en la región del Sahel y su creciente debilidad en los países de África Occidental donde París es aún influyente crea retos para Accra. Pero la gran amenaza es, sobre todo, la rápida implantación geopolítica de Rusia y China en la región. La frontera septentrional de Ghana ya está potencialmente amenazada, o al menos condicionada, por la dictadura del militar Traoré en Burkina Faso, uno de los nuevos hombres de Putin en la región. China, con su "diplomacia de infraestructuras" y Rusia con la presencia militar de su nuevo Africa Corps (antes Grupo Wagner), que mantiene en el poder a las juntas militares, presentan un riesgo de involución y sometimiento para todos los países de la zona, y Ghana es consciente de este problema. El informe, llamado a nutrir el debate de los políticos y diplomáticos ghaneses, ha sido firmado por Juan Pina (Fundalib) y Peter Bismark Kwofie (ILAPI).



Un nuevo Informe de la Fundación analiza las relaciones entre España y los EE.UU.



El estado de las relaciones entre España y los Estados Unidos es el título del trigésimo séptimo informe emitido por la Fundación. Esta línea de publicaciones breves presenta posiciones liberales fundamentadas en un análisis riguroso sobre las cuestiones tratadas, siempre a cargo de autores con especial conocimiento de la materia o como resultado de una investigación específica sobre la misma. En esta ocasión, Matthew Wu nos aporta desde Nueva York una visión de las complejas relaciones entre Washington y Madrid, que en los últimos años se han visto afectadas por cuestiones como la escasa aportación española a la defensa común, la decisión unilateral estadounidense de afirmar la marroquinidad del Sáhara Occidental, los desencuentros ideológicos entre Sánchez y Trump, la guerra arancelaria desatada por éste último en su segundo mandato, y otras cuestiones.

Únete a la Fundación

Comparte nuestro esfuerzo como Impulsor, Protector o Mecenaz y contribuye a restaurar la Libertad



Visita www.fundalib.org y comparte con nosotros el orgullo de hacer historia

Descubre en la pestaña "Únete" las ventajas que hemos diseñado para cada nivel de compromiso con el avance de la Libertad, y escoge tu aporte mensual en un momento y con total seguridad.

LA LIBERTAD AVANZA CON...

Leonardo Campos

	Nació y creció en Andalucía, vive en Valladolid desde hace tres años.
	Formándose en asesoría fiscal y en ciberseguridad mientras trabaja.
	Miembro del Comité Ejecutivo Federal del Partido Libertario. Colaborador habitual de AVANCE y de la Fundación.
	Libertad política, libre mercado y libertad de información, expresión y prensa.
	<i>Una política para la Libertad</i> , de Juan Pina; <i>Una revolución liberal para España</i> , de Juan Ramón Rallo; y <i>Ciencia política</i> , de Josep Vallès y Salvador Martí.
	<i>El contable I y II</i> , de G. O'Connor; <i>Regreso al futuro</i> , de R. Zemeckis; e <i>Interstellar</i> , de C. Nolan.
	<i>Suits</i> , <i>Sucesor designado</i> y <i>La casa de papel</i> .



Miembro de la comunidad de impulsores, protectores y mecenas de la Fundación, Leonardo es, pese a su juventud, un autor habitual de esta revista. Además, desde el VII Congreso del P-LIB es miembro de su Comité Ejecutivo Federal.

¿Cómo te defines políticamente?

Soy un libertario minarquista, creo que el Estado debería reducirse a la mínima expresión posible prestando aquellos servicios que no puedan suministrarse por la iniciativa privada. Pero soy consciente de que para llegar a esto primero tiene que darse una transformación de la mentalidad general de la población y eso llevará décadas de trabajo.

¿Tiene futuro un partido libertario en España?

Creo que el P-LIB terminará por consolidarse cuando el hiper-Estado no aguante más y revienten las cuentas públicas. Estoy seguro de que una parte de la sociedad española verá el fracaso del Estado del bienestar y buscará nuevas vías, y será entonces cuando

do el P-LIB tomará protagonismo y logrará la representación necesaria

¿Cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado como coordinador del P-LIB en Valladolid?

Estoy centrado en estudiar y desarrollar las candidaturas más realistas de cara a las elecciones municipales de 2027 para avanzar en municipios pequeños, crear equipos locales y extendernos en la provincia.

¿Cuál es el principal problema de España? ¿Por qué?

Son tres. El primero es un sistema político proclive a la corrupción. Necesitamos una justicia más rápida y un sistema electoral sin listas, con voto por preferencia y democracia interna en los partidos. El segundo es el sistema de pensiones, que terminará por reventar. El último es la vivienda que no permite ahorrar a la mayor parte de los jóvenes y que es causado artificialmente a través de la limitación artificial de la oferta, los impuestos a la misma e inseguridad jurídica por la okupación.

SCHILLER
INTERNATIONAL
UNIVERSITY

DOBLE

CERTIFICACIÓN

UNIVERSIDAD AMERICANA
MOVILIDAD INTERCAMPUS
PRÁCTICAS EN EMPRESAS LÍDER

ING

KPMG

LOEWE

TOYOTA

SAP

Google

DESARROLLO DE HABILIDADES DE ALTA DEMANDA

DATA & IA | LIDERAZGO | EMPRENDIMIENTO | SOSTENIBILIDAD

PARIS

FLORIDA

MADRID

HEIDELBERG



BECAS LIMITADAS DE HASTA EL 50%
Infórmate ahora!

CAMPUS MADRID
Paseo de Recoletos, 35
+34 914-482-488
schiller.edu



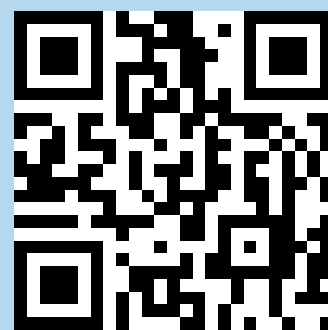
¿Quieres publicar tu libro?

El sello editorial de Fundalib, AVANCE, te ofrece la posibilidad de publicar tu libro, tanto en ensayo como en ficción, siempre que se encuadre en la misión de la Fundación y contribuya a la difusión y la promoción de la causa y los valores de la libertad individual en cualquiera de sus vertientes.

Nuestros autores reciben anualmente las regalías correspondientes, y nuestra producción responde a los más altos estándares de diseño y de calidad técnica. Puedes escanear el primer QR para visitar nuestra librería online y conocer los primeros títulos que hemos publicado desde el inicio de la actividad editorial en mayo de 2025.

Mediante el segundo QR podrás subir tu manuscrito para que lo evaluemos sin ningún compromiso y determinemos así la idoneidad para su publicación en una de nuestras colecciones.

CONOCE LA EDITORIAL



ENVÍANOS TU
MANUSCRITO

